

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 5° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-1103-2017
CARATULADO : ROMÁN/CONSEJO DE DEFENSA DELE
STADO

Santiago, once de Octubre de dos mil diecinueve

VISTOS:

Con fecha 20 de enero de 2017, don Darío Manuel Román Carrasco, Licenciado en Filosofía, domiciliado en Avenida Quilín N° 4985, Torre A, departamento N° 41, comuna de Macul, interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile, persona jurídica de derecho público, representada por don Juan Ignacio Piña Rochefort, abogado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, ambos domiciliados en Agustinas N° 1687, en razón de los antecedentes que expone.

Señala que nació en la ciudad de Santiago de Chile el 23 de julio de 1955. En el año 1973 se encontraba cursando el tercer año de Enseñanza Media en el Liceo de Hombres “Luis Alberto Barrera” de la ciudad de Punta Arenas. En tales circunstancias, siendo aún un menor de edad de 18 años, sobrevino el golpe de estado de septiembre de 1973.

Expresa que fue detenido luego del golpe de estado, el 16 de octubre de 1973, en un operativo en que actuó personal civil y militar en su lugar de estudio de entonces, el Liceo de Hombres de Punta Arenas. Lo trasladaron, vendado y esposado, hacia un recinto de la FACH: Bahía Catalina.

Indica que en este recinto de reclusión, en el que fue tratado como “prisionero de guerra” (bajo esa condición se le dijo que estaba) se le mantuvo gran parte del día encerrado y hacinado, dentro de un container, ventilado por un orificio de un diámetro no mayor a los 8 cm. Los únicos momentos en que les abrían las puertas era para recibir los alimentos que les tiraban (algunas veces la comida olía a descomposición orgánica), para sacarlos al “patio” (borde de la playa del recinto, muy cercano al muelle “Tres Puentes”) para darles un maltrato colectivo, palizas incluidas, no



«RIT»

Foja: 1

importando la condición física ni la edad de los “prisioneros de guerra”; y, también, cuando se los llevaba para “interrogatorios” (entiéndase: torturas).

Explica que, en su caso, mientras estuvo prisionero en el recinto de Bahía Catalina sufrió, en total, ocho eventos de interrogatorio y torturas, dos de los cuales se hicieron en el recinto que llamaban “fiscalía”, conocido como el “palacio -o casa- de las sonrisas”. Este recinto fue, históricamente, el Hospital Naval, ubicado en la Avenida Colón, entre la principal arteria de Punta Arenas, calle Bories y la calle Chiloé. Todos los interrogatorios fueron con torturas.

Relata que especial significación tuvo algunos episodios que, dentro de todo lo horrorosos que fueron todos los demás, llevaron al límite la brutalidad y crueldad por parte de los torturadores.

Afirma que entre el 26 o 27 de octubre de 1973 fue brutalmente golpeado con una serie de fuertes patadas en la espalda (columna vertebral, zona lumbosacra) y en la región posterior del cuello y cráneo. Todo ocurrió siendo ya tarde o noche en uno de esos días, en que se le obligó a salir del container, lo esposaron y vendaron los ojos, conduciéndolo al recinto de interrogación y tortura dentro de Bahía Catalina. El interrogatorio se inició con una etapa de amedrentamiento, de infundir miedo, “ablandamiento”, lo cual iba seguido de una dosis abundante de golpes de puño y patadas, que caían unos tras otros, en cualquier lugar del cuerpo. En un momento, en que el instinto lo alertó de una inminente patada a la zona genital, procedió de forma automática a defenderse lanzando una patada para bloquear el ataque, alcanzando al torturador. De forma casi simultánea escuchó a sus espaldas un grito: “yo te voy a enseñar karate” y un garabato, recibiendo una patada justo en la zona en que se ubica la “L5” de la columna vertebral. Un golpe de ese tipo busca poner fuera de combate al adversario, dejándolo inválido. No obstante, siguió recibiendo más y más golpes, incluso en el cráneo, lo que lo hizo perder la conciencia, hasta que siente que es arrastrado y lanzado de vuelta al container. Con el pasar de los días y semanas, cree haber identificado al autor de la agresión al reconocer su voz: era (en esas fechas) un cabo de la FACH, que hacía gala de su condición de “comando” y “paracaidista”, al que conocíamos como “el Palomo”, cuyo apellido cree era “Ortega”.



«RIT»

Foja: 1

Sostiene que en otra ocasión se le sometió a un simulacro de fusilamiento.

Manifiesta que no recuerda hasta qué fecha se prolongó la permanencia en ese recinto de “concentración de prisioneros de guerra”. Puede que hasta mediados o fines del mes de noviembre del 1973, oportunidad en la que fueron trasladados hasta el Estadio Fiscal de Punta Arenas.

Señala que días después que los trasladaran de recinto y, aquejado por los fuertes dolores que tenía por los golpes en la columna vertebral, fue llevado al Hospital Naval de Punta Arenas, en donde fue revisado por, supuestamente, personal médico. Se le tomaron radiografías y se le inyectó en la zona lumbosacra, lo que le dijeron era “raquídea”. Se indicó que debía permanecer en cama y no tener ningún tipo de actividad física.

Afirma que tal indicación no se cumplió, pues al segundo día del suceso lo sacaron a eso de las 05:00 AM, al típico “aporreo”. Por razones obvias, podía mover muy poco las piernas, pero la orden que se le daba era “correr”. Cuando cayó, sin poder ya moverse, un soldado le propinó un culatazo en la mandíbula superior izquierda, dejándolo con la dentadura con mucho dolor y movilidad dentaria.

Explica que desde que fueron trasladados al Estadio Fiscal de Punta Arenas hasta la segunda (o tercera) semana de diciembre de 1973, los prisioneros fueron sometidos a un período de mucha tortura física y psicológica colectiva. Los maltratos consistían en mucho “aporreo”, con golpes de puños y pies. También con trabajos forzados, consistentes en hacer zanjás, luego trasladar los volúmenes de tierra extraídos y llenar otras zanjás y, así sucesivamente.

Indica que en algunas ocasiones ello ocurrió en horas de la madrugada, participando adicionalmente en estos eventos personal distinto de los guardias (civiles, tanto varones como mujeres), algunos visiblemente en estado de ebriedad. Un par de veces este “aporreo” sumó disparos con fusiles ametralladoras sobre sus cabezas, mientras los hacían desplazar en punta y codo sobre piedras y tierra. Señala que trae a la memoria tales hechos, pues en tales ocasiones intentó explicar a los guardias que, por indicación médica, estaba imposibilitado de moverse. La primera vez que



«RIT»

Foja: 1

“reclamó” su derecho solo obtuvo respuesta con maltrato verbal; la segunda, se ganó una paliza y la prolongación, en solitario, del castigo (aporroeo).

Expresa que mientras duró el cautiverio en el Estadio Fiscal, tuvo tres sesiones más de interrogatorios, con las conocidas torturas: la parrilla (tormentos con electricidad, tortura que se aplicó en todos los once interrogatorios a los que estuvo sometido), el submarino húmedo, además de la “bienvenida” con golpes propinados con pie, manos, laques, etc., además de los apremios psicológicos.

Manifiesta que aproximadamente una semana antes de que nuevamente los trasladaran, se les hizo llegar el “comentario” que “debíamos colaborar”, en un tono “amistoso”. En ese mismo tono, se les comentó que “en algunas partes” los prisioneros habían sido lanzados al mar encadenados cuando no colaboraban.

Señala que el día 21 o 22 de diciembre, del mismo año, a eso de las 04:00 am, se les hizo levantar de modo muy violento. Se les ordenó empacar sus cosas y salir a formar. Se había desplegado un operativo militar con mucho armamento, incluso pesado. Se les esposaron las manos y se les fueron vendando los ojos, a medida que se los subía a camiones. Se dio cuenta que los llevaban hacia el mar, hacia el muelle de carga de Punta Arenas. Siempre vendados y esposados, se los hizo subir a un buque y se los mantuvo en la popa, a la intemperie, por largas horas. Finalmente, el buque zarpó y estando ya en altamar, les quitaron las vendas. Iban en el Patrullero Lientur y se dirigían hacia la Isla Dawson.

Relata que en Isla Dawson fue asignado al campo de concentración Río Chico. Cita el sitio www.dawson2000.com/ctie9.htm: “El Campo de Concentración Río Chico estaba ubicado alrededor de 15 kilómetros de Puerto Harris, en la costa, en una hondonada con cerros medianos a sus lados. El Campamento tuvo cinco barracas: Alfa, Bravo, Charlie, Remo e Isla. Río Chico empezó a funcionar el 15 de diciembre de 1973 con los prisioneros trasladados de Compingín. El 21 de diciembre comenzaron a llegar prisioneros trasladados de los diversos centros de detención de Punta Arenas y llenaron las barracas Alfa, Bravo y Charlie. Estas barracas tenían capacidad entre 80 a 90 personas. Los prisioneros que venían del norte estaban en la barraca Isla”.



«RIT»

Foja: 1

Sostiene que, si su afección músculo esquelética no hubiere sido tan aguda e intenso el dolor, tal vez podría ser este episodio uno más de los tantos que le tocó vivir como “prisionero de guerra”; pero, tener que transitar a marcha forzada, cargando sus bultos (incluido el equipamiento de cama) y además con la fuerte dosis de miedo, hacen que ese arribo al Campo de Concentración de Río Chico, haya dejado una huella que no puede borrar de su mente.

Afirma que la visión era una réplica no menor de los campos de exterminio Auschwitz-Birkenau, Dachau o Treblinka.

Señala que fue asignado a la barraca “Bravo” y su nombre fue cambiado por “B-50” o “Bravo 50”.

Indica que su estadía en Dawson se prolongó hasta mediados de agosto de 1974. Mientras permaneció en la Isla, las violaciones a los derechos humanos siguieron el mismo derrotero colectivo, existiendo al respecto suficiente narrativa testimonial. En lo concerniente a los daños sufridos, durante la reclusión en el Campamento Río Chico fue atendido por médicos, también prisioneros, el Dr. Arturo Girón y/o el Dr. Rodríguez, además de un dentista (cuyo nombre no recuerda). La asistencia entregada consistió, básicamente, en recetarle analgésicos para mitigar los dolores, parte de las secuelas, originados por los traumas provocados (músculo esquelético) y, en lo dental, mediante una improvisada ferulización para disminuir la movilidad dentaria superior, ocasionada por los golpes recibidos.

Expresa que desde Isla Dawson fue llevado a Punta Arenas, al D.I.M. N° 4 Cochrane (Destacamento de Infantería de Marina), el que se caracterizó por ser uno de los centros de detención con las más horribles y crueles torturas. No obstante, indica que durante su permanencia en ese recinto, además de respetarse su condición de salud (deteriorada), no sufrió apremios de ese tipo, excepto estar privado de libertad.

Manifiesta que debe haber sido a fines de septiembre o primeros días de octubre de 1974 (no recuerdo la fecha), que fue nuevamente trasladado, esta vez a dependencias del Hospital Naval “Cirujano Guzmán”, en Punta Arenas.



«RIT»

Foja: 1

Señala que se le informó allí que, dada su condición de salud (las lesiones en la columna vertebral), continuaría en condición de prisionero en esa unidad, hasta que un “Consejo de Guerra” lo juzgara.

Explica que se le hicieron exámenes clínicos y de imagenología. Diariamente se le suministraban pastillas (desconoce cuáles) y, periódicamente, se le inyectaba intramuscularmente alguna sustancia que desconoce. A estas alturas los dolores habían disminuido en intensidad, logrando alcanzar una mayor motricidad con las piernas.

Sostiene que la rutina diaria en ese recinto de prisión consistía en: recibir los alimentos (cuatro veces al día), los medicamentos (tres o cuatro por día), caminar dentro de la habitación y hacer reposo. Pero no podía salir de allí, estaba con custodia armada permanente, sin derecho a visitas. Se recibían cartas, las que previamente eran censuradas, como ocurrió todo el tiempo que persistió esta condición de “prisionero de guerra”.

Expone que, en esta situación de prisionero de guerra, hospitalizado en un recinto de la Armada de Chile, tuvo un compañero: Carlos González Yaksic, quien fuera diputado por esa zona hasta 1973, a la fecha fallecido. Señala que con él compartieron sus penurias y también sus sueños e ideales de construir una patria de todos, más justa y solidaria.

Relata que esto duró hasta los primeros días de diciembre de 1974, en que le ordenan empacar sus cosas y se le notifica que sería llevado a su domicilio (el de sus padres). Se le advierte que no puede hablar con nadie de lo vivido y que estará vigilado. Asimismo, se le notifica que solo podrá estar en la ciudad de Punta Arenas por tres días, debiendo presentarse en la Intendencia de Cauquenes a más tardar el día 11 de diciembre, pues estaba relegado a esa ciudad. Se le informa que, en caso de no cumplir con lo ordenado, quedará en condición de “prófugo” y las consecuencias podrían ser fatales. Se le prohibió mantener alguna relación con amistades, bajo pena de volver a estar prisionero.

Señala que le indicaron que la medida de relegación era administrativa, ordenada por la autoridad militar y de plazo indefinido.

Expresa que el traslado a su destino de relegación corrió por cuenta de sus padres. Es más, lo acompañó su madre, no obstante, su deterioro de



Foja: 1

salud. Durante su breve paso por Santiago pudo ser atendido por un dentista para exodoncia y prótesis.

Indica que su madre lo dejó instalado en Cauquenes en una residencial, dado que como estudiante a esa fecha, era totalmente dependiente económicamente. A principios de enero de 1975, su madre retornó a Punta Arenas, al verse agravado su estado de salud.

Sostiene que la llegada a un lugar desconocido, en tiempos en que el miedo estaba instalado en la sociedad chilena (por aquellas inmediaciones se sintió el horror del paso de la Caravana de la Muerte), no fue grata.

Agrega que incluso se mantenía prisionero en esa localidad a un sacerdote, de quien se decía que sería fusilado.

Señala que semanalmente debía firmar en un cuartel militar en presencia de personal de civil. Se encargaban de vigilarlo, haciendo seguimientos y chequeos en el lugar donde estaba alojado. No tuvo ninguna posibilidad de trabajar para costearse el sustento; además de existir mucha pobreza, nadie quiso contratar a un “terrorista” relegado, que estaba cumpliendo castigo. Tampoco pudo continuar sus estudios. Debía terminar la enseñanza media, pero no se le dio cabida en el Liceo de esa ciudad. Se le ofreció la alternativa de dar exámenes como alumno libre. Según lo que le dijeron algunas voces anónimas, había una orden militar de no ser admitido.

Manifiesta que los días, semanas y meses se sucedieron en una lenta rutina, asfixiante, y con el miedo constante que infundía el permanente hostigamiento y vigilancia por los organismos de represión y la permanencia en esa verdadera cárcel que resultó ser aquel pueblo.

Expone que en el mes de julio de 1975 la salud de su madre se agravó. Presentó ante el Intendente Provincial una solicitud de permiso para poder viajar a Punta Arenas. Inesperadamente se le concedió el permiso, por 15 días de ausencia, y así pudo retornar a su hogar.

Expresa que estando en Punta Arenas y dada la mediación de buenos oficios del Padre Obispo Tomás González ante los oficiales que dirigían la Región Militar Austral, se logró que se emitiera el Decreto que lo dejó en libertad. Esto fue a fines de julio de 1975 y confirmado, por escrito, en la primera semana de agosto del mismo año.



«RIT»

Foja: 1

Indica que a esa fecha se puso término a la arbitraria privación de libertad, siendo el actor menor de edad y habiendo sido sometido a distintas violaciones a los derechos humanos.

Afirma que jamás fue objeto de enjuiciamiento de clase alguna. Todo este periodo de privación y restricción de libertad fue completamente arbitrario.

Sostiene que el daño provocado en él, al igual que a miles de conciudadanos, no tan solo está referido al capítulo de la prisión y tortura. En efecto, fueron diecisiete años de vida bajo un régimen dictatorial, en el cual se suceden hechos de extrema crueldad e inhumanidad, privado de gozar, entre otros muchos derechos, de la libertad, más aún cuando quedó dentro de las “listas negras” y, por lo mismo, bajo permanente control y seguimiento, con las correspondientes exclusiones laborales o, incluso, nuevos riesgos que pusieron en peligro su integridad, provocando angustias por el menoscabo, miedos, ansiedades, inestabilidades emocionales y agudos problemas familiares y consecuencias.

Señala que inmediatamente de haberse confirmado su libertad (principios de agosto de 1975) realizó las gestiones para poder completar sus estudios en la Enseñanza Media. No hubo mayores contratiempos y así fue que en el mes de diciembre de ese año, pudo culminar los estudios y rendir la PAA para ingresar a cursar estudios superiores.

Manifiesta que la readaptación no fue sencilla ni inmediata. Hubo que comenzar el camino de revisar los daños provocados por las reiteradas violaciones a los derechos humanos, las secuelas físicas producto de las torturas físicas, el maltrato y los consecuentes miedos y fobias psicológicas que dejaron el largo periodo de prisión, además de la consecuente inadaptación social.

Expresa que no tan sólo él fue víctima, también lo fue su familia. Su madre sufrió graves trastornos psiquiátricos, registrados clínicamente, que dan cuenta incluso de un episodio delirante, amnésico, por cuatro días continuos, período en el que estuvo extraviada en la ciudad de Punta Arenas y fue encontrada, al cuarto día de desaparición, por una patrulla naval como a 15 kilómetros fuera de la ciudad. La conclusión a la que arribó el médico psiquiatra que trató el caso, fue que el miedo, la ansiedad



Foja: 1

y la angustia habían traspasado el “*border line*”, dejándola subsumida en un estado psicótico delirante.

Agrega que para su padre (padraastro) las consecuencias fueron directas: él era Sargento Segundo de la Armada de Chile. Cuando el actor fue detenido, fue llamado por el Oficial directo el cual le informó lo sucedido, ordenándole que no hiciera nada y que, en esa situación militar, pasaba a “complemento” (lo que implica que quedaba sin mando militar de cualquier especie y, lo peor, no podría ascender a los grados del escalafón superior), lo que truncó su carrera naval, siendo afectado fuertemente en lo económico para el tiempo de su jubilación.

Señala que para ejemplificar y mostrar que el período de violación a sus derechos, por parte de la dictadura, no cesó en agosto de 1975 y que, por el contrario, permaneció en el tiempo hasta 1990, provocando nuevos daños y agravando los ya ocasionados en el período 1973 – 1975, expondrá tres hechos que muestran lo afirmado.

1) En el mes de enero de 1983, mediante concurso público, postuló a una vacante de Profesor en la Universidad de Magallanes (UMAG). A fines del mismo mes fue citado por el Decano de la Facultad de Humanidades, quien le informó verbalmente que había ganado el concurso, lo cual se oficializaría a vuelta de las vacaciones y, por lo mismo, debía estar con su disponibilidad de tiempo laboral para la primera quincena del mes de marzo, del mismo año. Su residencia particular y laboral entonces estaba en la ciudad de Santiago, pero se encontraba de vacaciones en la ciudad de Punta Arenas, domicilio de sus padres. Durante febrero de ese año retornó a Santiago para cerrar su vivienda y ordenar sus asuntos laborales, volviendo a Punta Arenas la segunda semana de marzo para entrevistarse, nuevamente, con el Decano. Pero en esta ocasión quedó claro (durante la reunión) que “algo” había cambiado, ya que la certeza dio paso a la incertidumbre. La razón que se le expuso fue que el decreto estaba para la firma del Rector Yerko Torrejón Koscina y que se le avisaría. Finalmente, se le entrega la información, de manera informal y anónima, de que el Rector, a la vista de los informes que la CNI entregó, decidió dejar nulo el concurso y contratar a alguien que no fue calificado.



«RIT»

Foja: 1

2) En 1984, de regreso en Santiago, fue contratado como Profesor Investigador en el IPES Blas Cañas (hoy Universidad Cardenal Silva Henríquez). A mediados del mes de septiembre del mismo año, suceden dos eventos de manera simultánea: a) por orden del Rector, se pone finiquito al contrato, sin expresión de causa, y b) a los pocos días después, su departamento fue allanado por la fuerza, por personal de civil, de lo que fue advertido confidencialmente, antes que retornara a su morada de lo sucedido, lo cual evitó la inminente detención. Tuvo que pasar a la clandestinidad y no obstante las medidas implementadas, hubo tres ocasiones más en las cuales su vida se puso en peligro por “agentes de civil”, incluido intentos de captura con uso de tiros con armas de fuego. Al pasar a la clandestinidad, su departamento quedó abandonado y su mobiliario, menaje, electrodomésticos, electrónica, vestuario, una guitarra de concierto española y, lo más importante para él: su biblioteca (aproximadamente más de 5.200 libros de ciencias, filosofía, derecho, etc.,) desaparecieron íntegramente.

3) Casi a fines de 1985 formó su primera familia. Con su esposa constituyeron una empresa contratista en construcción, se inscribieron en el Registro de Contratistas del MOP y todo anduvo bien, dentro de los vaivenes del rubro, hasta diciembre de 1986. Mas, luego de promover públicamente una manifestación contra la dictadura, autorizada por las autoridades, el MOP les cerró la puerta para los contratos en ejecución, sin expresión de causa, haciendo efectivas boletas de garantía (por contratos recepcionados sin observaciones) y provocando pérdidas económicas de mayor cuantía. Ello lo obligó el 31 de julio de 1987 a emigrar de Punta Arenas.

Por otra parte, señala que, como consecuencia directa de los golpes recibidos en prisión, se le han producido secuelas físicas que hasta el día de hoy persisten, las que han requerido y seguirán requiriendo en el futuro atención médica. Las más relevantes y permanentes para su salud son las siguientes:

a) Lesión permanente en la columna vertebral, región lumbosacra, producto del golpe directo en vertebrae L5 – L4. Esto le provoca pinzamiento al nervio ciático ante algún esfuerzo puntual, además de



«RIT»

Foja: 1

producir dolores severos y restringe la movilidad de las extremidades inferiores.

Añade que los episodios agudos tienen una duración promedio de cinco días, que debe sobrellevar con reposo absoluto y medicación con analgésicos.

Expresa que al presente, esta patología se ha visto agravada por otras consecuencias, como una radiculopatía espinal, consistente en un trauma músculo esquelético, que junto a lo que se describe a continuación, constituyen a nivel clínico una incapacidad física del 55%, con la cual ha tenido que vivir por más de 40 años, sin remisión clínica y agravada al presente.

b) Lesión en la columna cervical, con discopatías y protrucción en C5 y C6, C7-D1, con estenosis agujero conjunción C5-C6, al presente con indicios de radiculopatía cervical. Esto es producto de golpes directos en la zona y por efectos colaterales de la lesión de columna vertebral. Sin remisión clínica y agravada al presente.

c) Tinnitus ótico, producto de la tortura del “teléfono”, que obliga a insertar audífono en oído izquierdo. Al presente, sin remisión clínica y agravada.

d) Pérdida parcial dental en mandíbula superior por golpe traumático. Con el pasar del tiempo pasó a condición desdentada total superior y, al presente, la mandíbula inferior presenta condición desdentada parcial.

En cuanto a las secuelas psicológicas permanentes por los maltratos recibidos, indica que son las que siguen:

a) Efectos psicológicos prolongados en el tiempo y permanentes: estrés postraumático, trastornos depresivos recurrentes con síndrome somático, episodios paranoides recurrentes, trastornos del sueño no orgánico, crónico. También trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Episodios recurrentes de ansiedad generalizada. Los anteriores daños se prolongaron en el tiempo desde 1973 hasta 1981, excepto el trastorno del sueño que permanece hasta hoy.

b) Luego del golpe de estado de 1973 y siendo aún un menor de edad, fue detenido y encarcelado, mantenido prisionero y relegado sin ningún debido proceso y juicio, sufriendo privación y/o restricción de



«RIT»

Foja: 1

libertad por un período de 22 meses bajo el imperio de la pura arbitrariedad administrativa. Sufrió torturas, golpizas y maltratos que han acarreado daños y secuelas, las cuales, de acuerdo al COMPIN, lo han dejado disminuido en un 55%. Esto es, quedó discapacitado de por vida en ese porcentaje. Ello constituye un daño vital en su vida personal, a la que se agrega la congoja por el sufrimiento subsiguiente que afectó a su entorno inmediato, especialmente su madre y su padrastro, y luego su esposa y sus hijos.

Señala que, en razón de los hechos expuestos, el Estado de Chile, a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003, le reconoció la calidad de víctima de prisión política y tortura en su Informe de noviembre de 2004. En la Nómina Oficial su caso se encuentra registrado bajo el número veintiún mil quinientos uno (21.501).

En cuanto a la estimación del monto de los perjuicios, expresa que demanda las siguientes sumas en que debo ser indemnizado a título de daño emergente:

1) Costos por reparación de salud pendientes. Indica que ninguno de los daños que le han causado los hechos por los que demanda, han sido objeto de reparación. El Estado a través de distintas acciones ha relegado a una condición básica los daños de salud provocados por sus agentes. La enmienda, corrección o la acción de remediar el daño ocasionado no es real y lo grave es que un daño de salud no atendido a tiempo y con idoneidad y eficacia profesional no tan solo agrava el daño, sino que genera otros, nuevos.

a) Diagnóstico e imagenología: respecto de la lesión de la columna vertebral y columna cervical, debe someterse a diagnóstico médico y resonancia nuclear magnética (RNM), conforme los siguientes ítems:

-Diagnóstico clínico, lo cual implica la concurrencia de cuatro especialistas: neurocirujano especialista en columna cervical, cirujano traumatólogo especialista en Columna Cervical, neurocirujano especialista en columna vertebral y cirujano traumatólogo especialista en columna vertebral;

-Exámenes de laboratorio, y



«RIT»

Foja: 1

-Estudios complejos de imagenología, fundamentalmente resonancias magnéticas, tanto cervical, lumbar, pelvis y caderas, con y sin medios de contraste, incluidos estudios de densidad mineral ósea, para determinar y probar el daño óseo estructural y sus secuelas.

Explica que según arancel Clínica INDISA, lo detallado tiene costo global de \$2.850.000.-

b) Tratamiento y cirugías: lesiones de columna vertebral, cervical y lumbosacra deberán ser reparadas mediante cirugías y rehabilitación. Valores estimados de cirugía con un nivel de 70% de fiabilidad de recuperación:

Cirugía columna Clínica Alemana

Cervical \$3.358.524.-

Dorsal \$3.358.524.-

Lumbosacra \$3.358.524.-

Días cama (8) \$4.177.045.-

Anestesia \$358.667.-

Visita de médico en clínica (8) \$544.000.-

Prótesis (4) \$6.133.333.-

Total \$21.288.617.-

c) Rehabilitaciones: lesiones de columna vertebral, cervical y lumbosacra deberán tener post cirugías, rehabilitación por kinesioterapia y uso de prótesis ortopédicas. Total gasto: \$4.935.000.-

d) Exámenes y controles post operatorios: lesiones de columna vertebral, cervical y lumbosacra deberán tener controles periódicos, al menos uno cada tres años, considerando una sobrevivencia de 21 años. Considerando un costo unitario de \$1.600.000.-, el total para los siete controles señalados es de \$11.200.000.-

f) Reparación daño ótico: el daño producido en el oído izquierdo es irreversible y sólo queda mitigación. Esto implica que, para aminorar el efecto tinnitus, se deberá realizar implante cloquear.

Añade que además del procedimiento quirúrgico inicial, se debe considerar control anual y reimplante cada siete años. Total gasto: \$5.828.000.-



Foja: 1

g) Reparación daño sistema digestivo: el daño colateral producido en el sistema digestivo y hepático es mayor y su remisión tiene pronóstico “reservado”, pudiendo derivar en una enfermedad catastrófica. Esto implica recibir atención periódica de gastroenterología (dos veces al año), hepatología (una vez al año), exámenes de laboratorio (dos cada año), gastroendoscopia (una cada dos años), colonoscopia (cada dos años), además de una dosis de medicamentos permanentes. Se vislumbra probable intervención quirúrgica de mediana consideración y, eventualmente, oncológica.

Además del procedimiento quirúrgico inicial, se debe considerar control anual y reincidencias terapéuticas. Total gasto: \$16.700.000.-

2) Respecto del daño moral, afirma que especialmente deben tenerse en consideración las siguientes circunstancias demostrativas de esta categoría especial de daño en su caso:

a) Fue privado de libertad y relegado injustamente por extensos periodos de tiempo, sólo por una orden administrativa de la dictadura militar y siendo entonces menor de edad;

b) Sufrió numerosos maltratos y crueles torturas, y

c) Los maltratos y lesiones infligidos le han significado una discapacidad de un 55%, secuelas con las que ha vivido por más de 43 años.

Estima que dicho concepto debe indemnizarse en un valor de \$24.000.000.- por cada año, hasta el presente. Ello totaliza la suma de \$1.032.000.000.-

En cuanto al derecho, expresa que la violación de los derechos humanos fundamentales ha sido elevada a conducta ilícita desde la perspectiva del derecho internacional e interno desde hace décadas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, considera como garantías supremas el derecho “a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (artículo 3), el que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 5), el “derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución



Foja: 1

o por la ley” (artículo 8), el que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (artículo 9), la

presunción de inocencia (artículo 11), el “derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” (artículo 13), el “derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” (artículo 18), el “derecho a la libertad de opinión y de expresión”, que “incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (artículo 19), etc. Otro tanto se repite en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Americana de Derechos Humanos.

Señala que estos derechos se encuentran garantizados en la Constitución de la República vigente desde el año 1980, la que dio continuidad –al menos en el papel- a similares derechos reconocidos en la Constitución Política de 1925, vigente a la data de ocurrencia de la mayor parte de los atropellos narrados.

Sostiene que los hechos relatados de que fue víctima vulneran todos y cada uno de los derechos antes mencionados.

Agrega que la obligación de reparar los daños causados por la vulneración de sus derechos fundamentales no solo encuentra asidero en las normas tradicionales sobre responsabilidad nacionales, sino que emana directamente de numerosos instrumentos internacionales, varios de ellos con igual entidad que el derecho interno, conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política.

Hace presente que el artículo 2° de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados parte a “adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos” los derechos y libertades que allí se reconocen. Precisamente, el artículo 5° de la Constitución Política de la República impone al ejercicio de la soberanía “el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, obligando a “los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución”.



Precisa que la obligación de reparar subyace en lo dispuesto en el artículo 63 N° 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto la Corte Interamericana, en aquellos casos en que decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos, dispondrá “que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

Añade que los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, fijados por Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, establecen en su párrafo XI el deber de reparar los daños sufridos, a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Observa que la indemnización, conforme el numeral 20° de dichos principios, ha de revestir las siguientes características:

“20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

- a) El daño físico o mental;
- b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
- c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
- d) Los perjuicios morales;
- e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.”

Finalmente, afirma que el artículo 2314 del Código Civil prescribe que “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le



«RIT»

Foja: 1

impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. Y en tal caso lo que ha de repararse es “todo daño”, como ordena el artículo 2329.

Agrega que en este caso concurren todos los requisitos que hacen procedente la responsabilidad civil que se demanda, esto es: capacidad de la demandada, actuación dolosa, daño y relación causal.

Indica que la línea argumental expresada en esta demanda ha sido reconocida por la Excma. Corte Suprema en fallo de 14 de septiembre de 2015 (Rol N° 1092-15).

Por lo expuesto y previas citas legales, solicita tener por entablada demanda en juicio ordinario de indemnización de daños y perjuicios en contra del Estado de Chile, se la admita a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, condenándolo a indemnizar los daños y perjuicios causados, esto es, la suma de \$1.094.801.617.- por concepto de capital, más intereses y reajustes, calculados desde la fecha de notificación de la demanda, y hasta la fecha efectiva de su pago, con costas.

Con fecha 10 de marzo de 2017, doña Irma Soto Rodríguez, abogado Procurador Fiscal, por el Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo, o en subsidio rebajar sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos.

Como primera defensa, opone la excepción de reparación satisfactiva, fundada en la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Señala al efecto que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior y desde lo que ya es común considerar el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Arguye que el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado



Foja: 1

para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Sostiene que por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Observa que en este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Manifiesta que tales programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra Ley 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Indica que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados: y (c) el favorecimiento de las condiciones



sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

Expresa que en lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Señala que por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la Comisión, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Sostiene que de esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas pérdidas se encontraba también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente a la “responsabilidad extracontractual” del Estado.



Precisa que así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Afirma que asumida esta idea reparatoria, la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Añade que en este sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Explica que mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de Justicia Transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones permitirá verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, indica que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca que en la discusión legislativa de esta norma se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras otros abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.



«RIT»

Foja: 1

Expresa que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2013, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$176.070.167.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$313.941.104.606.-, como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$41.659.002.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$20.777.324.047.- por la Ley 19.992; y

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

Afirma que en consecuencia, a diciembre de 2013, el Fisco había desembolsado la suma total de \$553.912.301.727.-

Expone que una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Señala que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que quedan por pagar.

Arguye que el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

En cuanto a las reparaciones específicas, indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones.

Expresa que la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Manifiesta que así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284.- para



«RIT»

Foja: 1

beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422.-, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Afirma que el demandado ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en dicho cuerpo legal.

Agrega que el actor recibió en forma reciente el aporte único de reparación Ley 20.874, por \$.1000.000.-

En cuanto a reparación mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

Sostiene que en este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Agrega que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Indica que a nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892.- Este presupuesto se distribuye por Servicio de



«RIT»

Foja: 1

Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra, sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Manifiesta que se ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Señala a su vez que se establecen también beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de educación.

Añade también que se conceden beneficios en vivienda, correspondientes a acceso a subsidios de vivienda.

Respecto a reparación simbólicas, sostiene que al igual que en todos los demás procesos de Justicia Transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Manifiesta que la doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio,



«RIT»

Foja: 1

que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Expone que en esta tarea de entregar una compensación satisfactoria destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993.

b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 1 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DDHH, unidos, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Afirma que de lo expresado puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DDHH no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Señala que así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden



Foja: 1

compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente.

Agrega que en este punto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 y ratificado por Corte Suprema en sentencia de casación de 30 de enero de 2013.

Sostiene que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Expresa que en este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Precisa que ciertamente, en un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (*Rule of Law for post-conflicts states*) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Afirma que se indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente



«RIT»

Foja: 1

sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

Añade que en esa misma línea, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Arguye que estando entonces la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, y al tenor de los documentos oficiales, es que opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el demandante.

Luego, en subsidio de lo anterior, interpone la **excepción de prescripción extintiva** con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código.

Señala al efecto que, según lo expuesto en la demanda, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió el demandante, ocurrieron a partir del 16 de septiembre de 1973(sic).

Afirma que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de la notificación de la demanda de autos, esto es, el



«RIT»

Foja: 1

21 de febrero de 2017, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil, por lo que opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones indemnizatorias que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Respecto de ambas prescripciones alegadas, afirma primeramente que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Expresa que efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado.

Arguye que esta disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Indica que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2494, inciso 1º del Código Civil).

Añade que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado. Como es sabido, toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.



En cuanto a la jurisprudencia al respecto, señala que nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Sostiene que en tal sentencia, la Corte Suprema habría zanjado la controversia, señalando:

1) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

2) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal.

3) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

En cuanto al contenido de la acción indemnizatoria, indica que cualquiera sea el origen o naturaleza de la indemnización, no tiene un



Foja: 1

carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté –como toda acción patrimonial– expuesta a extinguirse por prescripción.

Añade que debe considerarse que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

Afirma que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Finalmente, en relación con la alegación de imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, sostiene que se hará cargo de algunos instrumentos internacionales, adelantando que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Expresa que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución n.º 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1 letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra”; y b) a “los crímenes de lesa humanidad”; pero en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Señala que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y



Foja: 1

crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

Observa que la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Afirma que la Convención Americana de Derechos Humanos, por un lado, no sería atingente al caso sub-lite puesto que, en la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; por otro lado, indica que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

En relación a esta Convención, destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Agrega que el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.



«RIT»

Foja: 1

Sostiene que el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Señala que tal planteamiento ha sido reconocido por la Corte Suprema, quien ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas.

Agrega que lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Observa que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de los derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no es factible apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En subsidio a las excepciones y defensas expuestas, opone las siguientes **alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos.**

Con respecto al **daño emergente** alegado, indica que el demandante está solicitando la indemnización de gastos futuros en los que eventualmente incurriría, cuestión que no constituye un daño emergente.

Expresa que siendo el daño emergente la disminución o pérdida efectiva que ha experimentado un patrimonio, el monto solicitado por el actor bajo dicho concepto, en tanto gastos futuros, debe ser rechazado por



«RIT»

Foja: 1

no contener los requisitos mínimos establecidos por la ley y la doctrina para acceder a lo solicitado.

Añade que sin perjuicio de lo señalado, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, cuyo es el caso del demandante, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Sostiene que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Con respecto al **daño moral**, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales

Añade a lo anterior que así, tales daños recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente, y por tanto, se produciría a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Explica que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Señala que tratándose el daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra



«RIT»

Foja: 1

de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Agrega que por ende, dicha indemnización no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Añade que tampoco resultaría procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Observa que en tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Indica que, **en subsidio** de las alegaciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Expresa que no acceder a tal petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, arguye que los **reajustes** sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y se ha retardado el cumplimiento de la sentencia., y por consiguiente sólo podrán devengarse



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 20 de abril de 2017, la parte demandante evacúa el trámite de réplica.

Expresa que las excepciones de la demandada se desarrollan en un escrito que parece reproducir textualmente las alegaciones de otros casos aparentemente ligados, olvidando que las pretensiones indemnizatorias son estrictamente individuales y atingentes al específico daño reclamado en cada caso. Esta opción del demandado por utilizar un “escrito tipo” le hace incurrir en severos errores de apreciación de los hechos, que no pueden pasarse por alto para calibrar la consistencia e incluso la seriedad de la contestación, tales como confundir la situación del demandante don Darío Román Carrasco con los beneficiarios de leyes que no le son aplicables, como la ley 19.123 y 19.980, referidas a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura; y la ley 19.234, referida a exonerados políticos de igual época, así como hacer referencia a beneficios que en su caso nunca han operado.

Señala que sin perjuicio de ello en dicha contestación no existe cuestionamiento alguno a los fundamentos de hecho ni de derecho de la demanda, especialmente la ocurrencia de los hechos que dan origen a la pretensión resarcitoria ni la extensión de los daños provocados por el estado a través de la acción de sus agentes. De ello no se deriva de forma automática el establecimiento de los hechos de la demanda. No obstante, uno de ellos adquiere especial relevancia: no se cuestiona el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de víctima de prisión política y tortura del actor, a través de los procedimientos de la de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003.

Arguye que de esta forma, si el Estado ha reconocido a través de un acto oficial a su representado como víctima de violencia política y tortura por parte de sus agentes, actos que constituyen delitos de lesa humanidad, limitándose en su contestación solo a sostener que las consecuencias de dichas actuaciones ilícitas ya han sido satisfechas, se encuentran prescritas o deben ser compensadas en montos menores que los demandados, la existencia misma del daño y su extensión deben tenerse como temas esenciales, fuera de debate en esta causa.



En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva alegada, refiere que la demandada, a través de esta excepción, plantea que todo aquel daño que pudiera ser reclamado por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se encuentra ya reparado mediante diversas medidas de carácter general que han sido implementadas por el Estado luego de la recuperación de la democracia a través de distintas legislaciones y acciones gubernamentales. Se atribuye a esta línea argumental el carácter de “excepción” bajo el nombre de “reparación satisfactiva”, llamando de inmediato la atención que se invoque una institución de tal naturaleza, del todo ajena a nuestro sistema de responsabilidad extracontractual. El demandado no se ocupa de cimentar desde el punto normativo tal vinculación ni podría ser ello posible, ya que, si con ello se quisiera encubrir una excepción de pago, debería demostrarse detalladamente el alcance que pudiera tener en el caso de marras.

Explica que en un intento por interpretar el sentido de lo planteado por la demandada en este ítem, si es que no fuera derechamente la alegación de pago, pareciera la alegación de una derogación orgánica del sistema de responsabilidad civil a través de las leyes especiales que cita. Pero tal intento no podría prosperar, ya que para ello se necesitaría, al menos, una norma expresa -que no existe- o una incompatibilidad de carácter relevante en la aplicación de las normas generales, lo cual tampoco se ve en el caso concreto.

Agrega que por otra parte, todas las leyes de reparación y actos llevados a cabo por los diversos gobiernos democráticos han reconocido en sus textos que las medidas adoptadas por ellas son reparaciones de carácter parcial a los daños ya latamente conocidos. A mayor abundamiento, el texto de la última de ellas, la ley 20.874, referida a las víctimas de prisión política y tortura, de octubre de 2015, indica en su artículo 1º que mediante esta, se otorga “un monto único, en carácter de reparación parcial”, y a su vez, su inciso 3º de la misma ley, señala que: “Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura”, de lo cual se puede concluir que el derecho a pedir indemnización está implícitamente reconocido por el Estado en el texto de la ley citada, e



Foja: 1

incluso en el mensaje de dicha la misma se plantea como objetivo de ésta, el derecho de las víctimas a la reparación integral, reconociendo su precariedad indicando expresamente que “todavía es posible alcanzar mayores niveles de satisfacción”, lo que nos lleva una vez más a concluir, que ha existido desde el propio Estado, a través de su órgano legislativo, un reconocimiento al hecho de que ninguna de las leyes relacionadas con reparaciones a las víctimas de violación a los derechos humanos haya en algún caso agotado dicha necesidad.

Sostiene que en el caso específico de la ley N° 19.992, de la que es beneficiario el actor, su compatibilidad con el sistema general de reparación civil es evidente.

Argumenta que distintas intervenciones durante su tramitación parlamentaria así lo demuestran. Ya en el Mensaje con que el Presidente de la República envió el respectivo proyecto al Congreso Nacional se advertía que lo propuesto estaba lejos de una reparación total, sobre todo por el momento en que se dictaba la ley: “Debe entonces ahora el Estado entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido” y que “Al tomar una decisión respecto de su monto, tengo que tomar en cuenta todas las obligaciones que el Estado tiene con toda la sociedad, con todos los chilenos, particularmente con las familias más pobres de nuestra patria”, decía el Presidente, y que “Como Estado, en la medida de las posibilidades, hemos ido proponiendo y definiendo medidas de reparación moral, simbólica, y también económicas, a todas las personas que han sido víctimas de aquellos atropellos a sus derechos fundamentales”. La reparación nunca tuvo pretensiones de exhaustividad y no fue sino una forma en que el Estado asumió su propia responsabilidad en las vejaciones infligidas a sus ciudadanos y, por ende, distinta del sistema de responsabilidad civil, gobernado por el “todo daño” que debe ser indemnizado conforme el artículo 2329 del Código Civil, y no solo aquel que el autor unilateralmente estime que puede atender. Es evidente que no puede ser el mismo infractor quien establezca el importe de la reparación por el daño que ha infligido. Contraría todo sentido de justicia que el autor de una infracción se atribuya luego la calidad de ente que ha de juzgar su propia conducta.



Añade que otras intervenciones durante la tramitación del proyecto confirman lo expuesto, así las del diputado Montes: “Las reparaciones contempladas en el proyecto de ley, a las que se referirán otros colegas, son insuficientes” y las del diputado Quintana: “Respecto de las reparaciones, es cierto que hay insuficiencia en esta materia, la cual, en esencia, tiene que ver también con la justicia” y que “Los beneficios en salud y en educación no son suficientes”.

Indica finalmente que en parte alguna del texto se deroga el sistema general de responsabilidad civil, al cual ni siquiera se hace mención. Por el contrario, el artículo 2º inc. 2º de la ley establece que: “La pensión establecida en el inciso precedente será incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento”. De esta forma una víctima de daños reparados por más de una de estas normativas, jamás quedaría íntegramente reparado por esta vía.

Precisa a su vez que en reiteradas sentencias del último tiempo, los tribunales de primera instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de nuestro país, han establecido una línea jurisprudencial absolutamente clara y definida en el sentido de reconocer la precariedad de los intentos de reparación llevados a cabo por el Estado, rechazando excepciones como las opuestas en la presente causa.

Manifiesta que esta precariedad ha llevado a que se unifiquen los criterios en orden a acoger las demandas civiles mediante las que se pretende obtener una reparación justa, que mitigue en alguna proporción importante los daños perpetrados por agentes del Estado. La defensa basa la argumentación de esta excepción, en que cualquier reparación por la que debiera responder se encuentra satisfecha con las medidas implementadas por el Estado desde la recuperación de la democracia hasta la fecha, lo que se encuentra totalmente alejado de la realidad.

Afirma que en su exposición hace referencia a medidas como beneficios de vivienda y educacionales, de los cuales el actor ni siquiera ha sido beneficiario. El demandado habrá de demostrar en el curso de este juicio en qué han consistido los beneficios de vivienda que invoca



«RIT»

Foja: 1

específicamente respecto de la situación del demandante, los que no han existido

Señala que otro tanto ocurre con los beneficios educacionales. Originalmente concebidos como “continuidad gratuita de los estudios”, en el artículo 11° de la ley N° 19.992, en la práctica constituyeron un beneficio para el daño sufrido por el entorno familiar de las víctimas de la tortura y prisión política, pero no de todos ellos, sino que de solo uno, dura decisión entregada a las propias víctimas en virtud del artículo 6° transitorio de la ley N° 20.405, introduciendo de paso un elemento altamente disruptivo al interior de las familias (el actor tiene 5 hijos).

Indica que se alude incluso a beneficios como el PRAIS, programa cuyo alcance es solo conceder “gratuidad de las prestaciones médicas a que se refiere la ley N° 18.469, en la modalidad de atención institucional, a través de los establecimientos que constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud, o que estén adscritos al mismo” (artículo 7° ley N° 19.980), por lo que su cobertura depende, como ha sido el caso de su representado, de la disponibilidad existente en el precario sistema de atención pública en nuestro país, especialmente escaso en el ámbito de especialidades, conociéndose casos de víctimas que han fallecido esperando atenciones quirúrgicas de urgencia. La ley citada consulta solo “los recursos específicos necesarios para dotar a cada uno de ellos de un equipo interdisciplinario especializado para atender la salud mental de los beneficiarios y derivarlos a la red de salud pública”.

Expone que todas y cada una de las torturas recibidas por el actor en prisión, no han cesado. Se han prolongado hasta el presente y seguirán en el futuro, considerando que el PRAIS, aun considerando la alta calidad de sus profesionales, no tiene capacidad para intervenir clínicamente ni derivar oportunamente a especialistas. Al demandante le infringieron daños severos, los que le significaron vivir su adolescencia, vida adulta juvenil, adultez y ahora entrando en su condición de adulto mayor, con una discapacidad severa, evaluada por el COMPIN, primeramente, en un 55% y en un segundo informe en el 60%, producto de la tortura. Eso significa vivir toda la vida disminuido, menoscabado, discapacitado. Y ese daño no ha cesado.



Señala que no es difícil que la contestación de por atendida la reparación del daño sufrido por el actor, más que haciendo referencia genérica a estas leyes, desde que de forma alguna se ha preocupado por describir cuáles han sido las prestaciones específicas que el actor habría recibido, pues de dicho examen aparecería su absoluta insuficiencia. Esta omisión solo puede cubrirse a través de los montos demandados en la causa.

Añade por último que una cosa es “entregar beneficios a manera de compensación” y, otra distinta es la reparación e indemnización. Estas últimas no pueden ser colectivas, sino que proporcionales al daño efectivamente e individualmente producido.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva alegada, arguye que la violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado en un gobierno de facto, con bienes y recursos del Estado, en períodos de excepción dictaminados por el propio Estado, constituye, a la luz del Derecho Internacional, un delito de lesa humanidad, y como tal, su persecución tiene el carácter de imprescriptible. Ello se encuentra, además, avalado por el derecho interno de buena parte del mundo civilizado, base del *ius cogens* internacional moderno, principio consuetudinario de derecho internacional, vinculante para el Estado de Chile, según lo establece el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Afirma que en la actualidad, es abundante la jurisprudencia que acoge la preeminencia del Derecho Internacional por sobre las normas de derecho interno respecto a la prescripción extintiva de las acciones civiles derivadas de casos de delitos de lesa humanidad, lo cual desecha la aplicación de las disposiciones del Código Civil, alegadas por el Fisco, referente a la prescripción de las acciones civiles de cobro de indemnizaciones o reparaciones por los citados delitos.

Indica que en apoyo a lo indicado, es pertinente mencionar las sentencias recaídas en las causas roles Rol N° 1424-2013, 20.288-2014, 22652-2014, 11208-2015, 13154-2015, 5706-2015, 7961-2015 de la Corte Suprema, y sentencia recaída en causa rol C-3-2015 de la Corte de Apelaciones de Temuco.

En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, manifiesta que en su escrito de contestación, la demandada cuestiona la naturaleza de la



Foja: 1

indemnización solicitada y el “excesivo” monto pretendido. La confusión del demandado no es casual, ya que de propósito omite que lo único realmente “excesivo” en el presente caso es el daño perpetrado por los agentes del Estado al demandante, de modo que el monto demandado fluye como necesaria consecuencia de aquél. El actor desde temprana edad debió padecer de la represión, violencia, agresiones y torturas de parte del aparataje estatal en época de dictadura; daños que no terminaron con ésta, sino que ha arrastrado hasta el día de hoy, producto de las severas secuelas físicas y psicológicas que le han significado, y que han sido latamente descritas en la demanda.

Respecto al daño emergente reclamado, expresa que la demandada señala que este no constituiría tal por tratarse de gastos futuros y no de una disminución o pérdida efectiva que haya experimentado el patrimonio del demandante. Manifiesta que el error sería evidente, puesto que en sede indemnizatoria el daño siempre debe expresarse en un correlato material, única forma de evaluarlo. Salvo mermas patrimoniales dinerarias, los daños materiales se evalúan en el importe que significa restituir al afectado en la misma situación patrimonial que presentaría de no haber sido dañado, que en este caso tiene que ver con los costos de la medicina que podría aliviar y/o reparar sus dolencias. Se trata de un daño material que, si bien es futuro, es a su vez cierto.

Sostiene que el demandado pareciera requerir que se demande a título de indemnización solo gastos efectivamente realizados, pretensión insostenible en ocasiones como esta, en la cual la cuantía del monto hace imposible a una persona como el demandante desembolsar directamente dicha cantidad. La situación económica del demandante y el alto costo de las prestaciones que podrían devolverle la salud, en ningún caso le privan del derecho de pedir aquello que en derecho le corresponde, pues los gastos en los que debe incurrir para mejorar su estado de salud, son directa consecuencia de la violencia, maltratos y torturas perpetrados en su contra por agentes del Estado en época de dictadura.

Reitera finalmente que ante la pretensión del demandado de excusarse de incurrir en el pago de reembolsos médicos invocando la



«RIT»

Foja: 1

existencia del sistema PRAIS, que este “beneficio” no contempla las patologías que padece don Darío Román.

Respecto del daño moral reclamado, expresa que hace suyo lo indicado por la propia parte contraria, en cuanto manifiesta que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, lo que es difícil de lograr tratándose del daño puramente moral, pues este no se borra por obra de la indemnización. Efectivamente ninguna indemnización será capaz de borrar los daños sufridos por el demandante durante estos largos 44 años, especialmente porque han generado daños permanentes en él. Pero esto constriñe con más fuerza al Estado, al menos para intentar reparar el daño en que aquello sea posible, y como lo es, haciendo pago de la suma indemnizatoria solicitada.

Por último, en relación a los intereses y reajustes solicitados, manifiesta que su procedencia es inevitable dada la larga data de los daños cuya reparación se demanda, resultando inevitable que estos se calculen desde la fecha de notificación de la demanda.

Con fecha 2 de mayo de 2017, la parte demandada evacuó el trámite de dúplica.

Señala primeramente que ratifica la totalidad de los argumentos expresados en la contestación de la demanda.

Luego, en relación a la excepción de reparación, indica que reitera lo señalado en la contestación de la demanda, en cuanto a que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada. Insiste respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por el demandante, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación. En dicho contexto, se citan las leyes 19.123, 19.980, 19.234 y 19.992, pues todas ellas forman parte del conjunto de medidas legales adoptadas por el Estado de Chile con el fin de reparar



«RIT»

Foja: 1

los perjuicios sufridos por las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

En relación a la prescripción de la acción, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”.

Señala que en dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Agrega que desde hace más de 10 años la Excma. Corte ha señalado reiteradamente que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. Que la aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Afirma que también la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

Destaca al efecto sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016.

Con fecha 23 de octubre de 2017, se recibe la causa a prueba.

Con fecha 21 de enero de 2019, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 20 de enero de 2017, don Darío Manuel Román Carrasco, interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile, solicitando se la admita a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes,



«RIT»

Foja: 1

condenando al demandado a indemnizar los daños y perjuicios causados, esto es, la suma de \$1.094.801.617.- por concepto de capital, más intereses y reajustes, calculados desde la fecha de notificación de la demanda, y hasta la fecha efectiva de su pago, con costas, todo ello conforme a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho previamente reseñados en la parte expositiva del este fallo.

SEGUNDO: Que, con fecha 10 de marzo de 2017, doña Irma Soto Rodríguez, abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por la parte demandada Fisco de Chile, contesta la demanda solicitando su rechazo, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho reseñados en la parte expositiva de este fallo.

TERCERO: Que la parte demandante, a fin de acreditar los hechos en que funda su acción, acompañó los siguientes documentos al proceso, en forma y no objetados:

Conjuntamente con presentación de fecha 20 de enero de 2017:

1.- Copia simple del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de noviembre de 2004.

Conjuntamente con presentación de fecha 18 de abril de 2018:

2.- Copia simple de la portada y página 727 del Listado de Prisioneros Políticos y Torturados, correspondiente al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de noviembre de 2004.

Conjuntamente con presentación de fecha 3 de mayo de 2018:

3.- Copia de informe dental Dr. Asaad Arab, de 19/08/2009.

4.- Copia de Informe Clínico cirugía máxilo-facial Dr. Leonardo Aguilar.

5.- Copia de certificado emitido por Dr. Jaime Acuña, implantología.

6.- Copia de Informe de Resonancia de columna cervical del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, emitido por el Dr. Rodrigo Flores, de 02/02/2010.

7.- Copia de Informe de Resonancia de columna lumbar del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo, emitido por el Dr. Rodrigo Flores, de 02/02/2010.



«RIT»

Foja: 1

8.- Copia de Informe de Endoscopia Digestiva Alta del CRS de Peñalolén Cordillera Oriente, Unidad de Pabellón, Dr. Carlos Tapia, de 25/09/2012.

9.- Copia de solicitud de interconsulta o derivación para cirugía ambulatoria- endoscopia, de 24/12/2015.

10.- Copia de Informe de Examen, emitido por la Dra. M. Soledad Gallo, Fisiatra, Instituto Nacional de Rehabilitación, de 11/06/2012.

11.- Copia de solicitud de interconsulta o derivación para medicina física y rehabilitación, de 29/08/2016.

12.- Copia de solicitud de interconsulta o derivación para otorrinolaringología, de 29/08/2016.

13.- Copia de solicitud de interconsulta o derivación para otorrinolaringología, de 30/08/2016.

14.- Copia de panendoscopia, de fecha 08/11/2016.

15.- Copia de informe de TAC de columna cervical y lumbar, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Hospital del Salvador, Servicio de Imagenología, Dr. Renzo Zamboni, de 11/11/2016.

16.- Copia de solicitud resonancia magnética, de 02/12/2016.

17.- Copia de informe de estudio citogenético, de 09/12/2016.

18.- Copia de constancia información al paciente GES sobre leucemia mieloide crónica, de 20/12/2016.

19.- Copia de Informe de Certificado de Discapacidad, Ministerio de Salud, Secretaria Regional Ministerial de Salud RM, COMPIN RM, emitido por el Dr. Ladislao Estay Escuti Presidente Subcomisión Oriente, de 21/12/2016.

20.- Copia de informe médico reevaluación COMPIN, de 06/01/2017.

21.- Copia de Certificado de Discapacidad, Ministerio de Salud, Secretaria Regional Ministerial de Salud RM, COMPIN RM, emitido por el Dr. Ladislao Estay Escuti Presidente Subcomisión Oriente, de 08/02/2017.

22.- Copia de informes y presupuesto de AUDITRON para dispositivo de tratamiento de hipoacusia neurosensorial moderada en oído



«RIT»

Foja: 1

izquierdo, con presencia de tinnitus permanente, por la suma de \$2.465.000.-, de 19/05/2017.

23.- Copia de informe de resonancia magnética de columna cervical, emitido por el Dr. Marco Antonio Verdugo, de 03/08/2017.

24.- Copia de informe de resonancia nuclear magnética de columna lumbar, emitido por el Dr. Marco Antonio Verdugo, de 03/08/2017.

25.- Copia de informe de TAC de Columna Lumbar y Cervical emitido por el Dr. Renzo Zamboni, de 22/10/2017.

26.- Copia de informe de RM tractografía sin anestesia, emitido por el Dr. Víctor Arriagada Verdugo, Neuro-Radiólogo, Hospital del Trabajador, ACHS, de 07/12/2017.

27.- Copia de orden clínica MEDS, de 18/12/2017

28.- Informe Médico emitido por el Dr. Marcelo Pérez Cáceres, Traumatólogo, Clínica Meds, de 21/12/2017.

29.- Copia de presupuesto N° 5016332, de fecha 26 de diciembre de 2017, Clínica Meds, respecto de don Darío Román, por un monto total estimado de \$10.034.044.-, diagnóstico cerviobraquialgia.

30.- Copia de presupuesto N° 5016688, de fecha 9 de enero de 2018, Clínica Meds, respecto de don Darío Román, por un monto total estimado de \$10.034.044.-, diagnóstico estenorraquis lumbar.

31.- Copia de informe RM columna cervical y lumbar, de 29/12/2017

32.- Copia de informe médico emitido por el Dr. Alejandro Escobar Pérez, Neurocirujano, del Servicio Neurocirugía Adulto; Instituto de Neurocirugía Asenjo, de 04/04/2018.

33.- Copia de solicitud de interconsulta o derivación para kinesiología, 04/04/2018.

34.- Copia de informe pericial forense clínico, emitido por Dr. Bernardo Morales, de 15/04/2018.

Conjuntamente con presentación de fecha 18 de mayo de 2018:

35.- Certificado de nacimiento del actor don Darío Román Carrasco.

36.- Certificado de nacimiento de don Darío Román Soto.

37.- Certificado de nacimiento de don Francisco Román Aguilar.

38.- Certificado de nacimiento de doña Camila Román Butrón.



39.- Certificado de nacimiento de don Pablo Román Butrón.

CUARTO: Que la demandante contó además con prueba testimonial, consistente en las declaraciones de los testigos don Bernardo Javier Morales Catalán, doña María Paulina Salas Sáez y doña María Leontina Díaz Urrutia, quienes legalmente examinados y sin tachas expusieron:

El primer testigo, don Bernardo Javier Morales Catalán, en cuanto al punto N° 1 de prueba, señala que de acuerdo a los antecedentes que tuvo a la vista remitidos por el Sr. Millán, en el punto 1 de los objetos de análisis pericial referidos en el informe por él elaborado, consistente en carta enviada por la víctima al abogado Millán donde explica y fundamenta su parecer, el mérito de lo que a su parecer son los fundamentos para el presente juicio, hace referencia explícita de su condición de víctima por violación de sus derechos humanos, condición que habría sido reconocida por la comisión Valech, bajo la Ley 19.992 donde incluso hace referencia al número de registro de su causa al amparo de esta ley, cree que es el 21501.

En cuanto al punto N° 3, expresa que sí, los que se encuentran avalados por diferentes y múltiples informes médicos que abarcan una importante extensión de tiempo, lo que adquiere particular relevancia en el caso por cuanto es posible observar la evolución progresiva y agravante de los perjuicios a los que se refirió. El objetivo central de la pericia solicitada es establecer la relación de causalidad entre los hechos testimoniales relatados por la víctima y la coherencia biológica y biomédica por las lesiones presentadas, las cuales son posibles de agrupar de la siguiente forma:

1.- Lesiones anatómicas con traducción física y funcional consistentes principalmente en graves lesiones de la columna vertebral focalizadas en dos grandes áreas, cervical y lumbosacra, y en cada una de ellas, en múltiples segmentos que resultan en términos simples en una artropatía grave, esto es, una alteración degenerativa de los discos intervertebrales y los tejidos óseos y blandos periarticulares en cada segmento afectado, con secuelas neuropáticas radicales, esto es, de los nervios periféricos que, de cada segmento afectado se dirigen a estructuras y órganos blancos periféricos provocando importantes secuelas funcionales motoras y sensoriales que evaluadas en la COMPIN en el año 2017, alcanzan a un 60% de invalidez de la víctima. Existe además otra lesión física de secuela grave consistente en la pérdida completa de la



Foja: 1

dentadura completa del maxilar superior izquierdo y parcial de la dentadura de la mandíbula inferior con lesiones en el tiempo del reborde alveolar maxilar, esto es, la pérdida del hueso capaz de soportar un implante definitivo dental, por lo que la víctima ha tenido que sobrepasar esta condición durante muchos años solamente mediante el uso de prótesis dentales parciales lo que está lejos de representar una solución eficiente a esta lesión.

2.- Lesiones neurosensoriales del aparato acústico que resultan en una condición de hipoacusia del oído izquierdo, con requerimiento de uso de audífono a permanencia, agravada por la existencia de un tinnitus, lo que consiste en un ruido tipo silbido permanente que afecta el desempeño regular de la víctima fundamentalmente en su capacidad de concentración impactando en las competencias necesarias para ámbitos laborales.

3.- Daño psiquiátrico expresado según diagnóstico de evaluadores del programa PRAIS, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente como su estado de estrés postraumático grave consistente entre otros en trastornos del ritmo vigilia sueño, estado paranoide recurrente, estado ansioso y como consecuencia de ésta última, somatización, con blanco en varios órganos, considerados en el informe PRAIS como asociados al estado de estrés post-traumático por no existir otras condiciones etiopatogénicas, que las expliquen referidas a la causa (etio) y al mecanismo (patogénesis), como un estado de gastritis crónica persistente, una cicatriz de ulcera bulbo duodenal, una pancreatitis aguda el año 2015 y finalmente asociado a una alteración de la inmuno vigilancia, una condición neoplásica maligna consistente en una leucemia mieloide crónica, que según referencia del especialista PRAIS en su experiencia y en la referencia bibliográfica internacional, se encuentra con frecuencia asociada a estados crónicos de estrés post-traumático en este tipo de víctimas. Esto le consta por análisis metapericial de los informes médicos tenidos a la vista y de la evaluación personal médica realizada a la víctima.

Repreguntado para que diga por cuánto tiempo se han extendido las patologías a que ha hecho referencia, afirma que la extensión es desde el momento mismo en que la víctima sufre las lesiones físicas que ocasionan los daños anatómicos que son la causa de las patologías que se han descrito, es decir, desde el año 1973 y se mantienen a la fecha, lo que representa un agravamiento en el transcurso del tiempo de dichas lesiones, por cuanto han



Foja: 1

experimentado una progresión natural sin que haya existido una intervención médico quirúrgica adecuada y suficiente en todo este tiempo, pudiendo haber corregido parcialmente algunas de éstas lesiones sin alcanzar el nivel de gravedad e invalidez que presenta hoy la víctima. Esto lo afirma en razón de los elementos de análisis pericial tenidos a la vista que fundamentan su informe y de la evaluación médica de la propia víctima.

Repreguntado para que diga cuáles son las intervenciones quirúrgicas o médicas que permitirían reparar las patologías a que ha hecho referencia, señala que las intervenciones médicas quirúrgicas o de apoyo terapéuticas que la víctima ha requerido en el tiempo se pueden separar en tres grandes manetos:

1.- En el tiempo inmediatamente después de haber sufrido las lesiones en que la posibilidad de reparación médico quirúrgica hubiera tenido un importante impacto con una recuperación significativa del daño anatómico y funcional. Esta posibilidad existió, puesto que la víctima, estando recluida fue derivada producto de los síntomas y padecimientos que sufría, al Hospital Naval de Puntas Arenas, donde sólo recibió como manejo médico reposo e inyecciones locales referidas en su relato por la víctima como inyecciones raquídeas las que, en la práctica, corresponde simplemente a la búsqueda anestésica local. Agrega que la indicación de reposo médico en el relato de la víctima tampoco fue cumplido, puesto que con regularidad era levantado para realizar trabajos con esfuerzo físico cuya condición médica le impedía desarrollar y por lo cual era nuevamente golpeado en las mismas zonas dañadas.

2.- Un período intermedio de larga duración, entre su liberación después de la relegación en Cauquenes en el año 1975 y hasta alrededor del año 2010 en que, las lesiones ya se encuentran consolidadas y en etapa de progresión permanente por falta de tratamiento adecuado.

3.- La etapa de los últimos ocho años en que es acogido por el programa PRAIS pero que dada la gravedad y consolidación de las lesiones, resulta absolutamente insuficiente en el alcance que dicho programa tiene para resolver con eficiencia y eficacia las graves y permanentes lesiones secuelas que presenta a esta fecha la víctima, quedando sólo como alternativas posibles, complejas cirugías de liberación neuronal e intentos de



«RIT»

Foja: 1

reparación de espacios anatómicos gravemente secuestrados, para el caso de las lesiones a la columna vertebral. Respecto de las lesiones dentales desde hace relativamente reciente tiempo se han desarrollado tecnologías que permiten resolver eficientemente el daño de reabsorción alveolar maxilar que le permite a la víctima acceder a tratamientos de implantología dental que resuelva con eficiencia y dignidad su lesión dental, esto expresado en informe odontológico emitido por cirujano maxilofacial que es referido en el cuerpo del informe pericial.

Afirma que respecto de las otras lesiones presentadas por la víctima, la lesión neurosensorial causante de la hipoacusia y el tinnitus, no existe tratamiento médico ni quirúrgico descrito a la fecha que le permitan recuperar dicho daño neurológico, solo le queda como posibilidad ir cambiando el audífono en la medida que su condición de hipoacusia vaya empeorando, condición que irremediablemente ocurrirá.

Sostiene que respecto del estrés post traumático y basado en el informe del psicólogo clínico perito del PRAIS, dada la temprana edad de los hechos causales de este síndrome y la intensa magnitud de los hechos que lo provocaron, no existe posibilidad de tratamiento efectivo desde la dimensión neuro psicológica, siendo cualquier intervención clínica, sólo una alternativa para ayudar a un mejor pasar de la víctima. Todo lo anterior lo afirma en razón de los elementos de análisis pericial tenidos a la vista que fundamentan su informe y de la evaluación médica de la propia víctima.

Repreguntado para que diga si sabe qué costo tendría el tratamiento de implantología, manifiesta que tiene referencia, puesto que la evaluación del costo es compleja, dada la extensión de la lesión y la gravedad de la condición del hueso base, esto es, el maxilar, en el cual debe realizarse el implante. Este procedimiento médico de alta complejidad debe ser efectuado por especialista, ya sea por cirujanos maxilofaciales odontólogos o médicos cirujanos. También dependerá de la técnica implantológica empleada la cual puede ser en base a injertos óseos o a osteosíntesis en base a células madres. A modo referencial un implante corriente por pieza dentaria varía en el mercado entre \$500.000.- y \$1.500.000.-. En este caso, se requiere la totalidad de la dentadura del maxilar superior y buena parte del inferior teniendo presente que tenemos 32 piezas dentarias.



«RIT»

Foja: 1

Se le exhibe el documento N° 32 del escrito de 3 de mayo de 2018 -signado con el número 32 en el motivo 3° de este fallo-, a objeto de que lo reconozca, indicando el testigo que lo reconoce, reconoce su firma y ratifica su contenido.

En cuanto al punto de prueba N° 4, manifiesta que en su opinión existe daño moral el cual se ha expresado por la consecuencia de los daños anatómicos y las lesiones antes descritas, como dolor persistente y recurrente de mediana a alta intensidad que ha dificultado y, en casos, impedido su desempeño en diferentes ámbitos de la vida cotidiana conforme a lo que correspondería a un sujeto de sus edad, afectando, entre otros, su capacidad laboral, al dificultar su desplazamiento y la capacidad de continuidad en su trabajo lo que genera lucro cesante, en otro ámbito, afectando el ámbito relacional, familiar y social, y en relato de la propia víctima en entrevista con el suscrito afectando hasta su vida sexual y relación de pareja. Otro aspecto del daño moral consiste en la discriminación y estigmatización que ha sufrido en diferentes momentos posterior a su liberación como preso político de guerra según se refiere la propia víctima toda vez que estando relegado en Cauquenes y con necesidad de concluir sus estudios secundarios le fue negada dicha posibilidad por instrucción de la autoridad local según refiere en su relato, además de verse impedido de poder acceder a trabajos regulares remunerados por haber sufrido acoso permanente y seguimientos por parte de los agentes de inteligencia de la época también según su propio relato. Finalmente, la condición de estrés postraumático permanente con síndrome de somatización multiorgánica, han venido a agravar su limitada condición relacional y laboral. Este daño a que ha hecho referencia y en coherencia con el mecanismo causal antes referido, se extiende lógicamente desde el periodo de su cautiverio e inmediata liberación y hasta la fecha. Esto lo afirma en razón de los elementos de análisis pericial tenidos a la vista que fundamentan su informe y de la evaluación médica de la propia víctima.

En cuanto al punto de prueba N° 5, expresa que el principio de causalidad desde el punto de vista pericial forense tiene por objeto establecer la causa precisa y necesaria que origina los efectos de análisis pericial, descartando con razonable certeza médico forense otros agentes o mecanismo que pudieran estar involucrados en dichos resultados. Respecto a las lesiones



«RIT»

Foja: 1

de la víctima, no existiendo en su relato histórico biográfico otras condiciones genéticas, médicas, laborales o de cualquier naturaleza que expliquen el daño físico y anatómico presentado por la víctima, responde plenamente y satisface el principio de causalidad, relatado por ésta en cuanto que posterior a agresiones físicas sufridas por parte de los agentes del Estado responsables de su cautiverio, en las áreas anatómicas en las cuales hoy se verifican las lesiones en discusión y análisis, se presentan temporalmente en forma inmediata la signología clínica que caracteriza en esta etapa dichas lesiones. Desde el punto de vista pericial forense, estas lesiones consisten en daño estructural de la matriz cartilaginoidea de los discos intervertebrales que resulta por tratarse de un órgano avascular en una reparación con formación de fibro-cartílago lo que impide la oxigenación y nutrición de los condrocitos, encargados de la mantención del cartílago, por lo cual el daño resulta irreparable, salvo intervención quirúrgica directa con reemplazo del cartílago o fijación de la columna, intervención médica que no fue realizada y cuya consecuencia evolutiva es la artropatía degenerativa grave que presenta hoy la víctima. Respecto del daño neuroacústico, éste tiene como mecanismo que satisface el principio de causalidad, los trastornos neumáticos sobre la estructura axonal del nervio acústico, que se presentan en mecanismos de tortura como los relatados por la víctima en ésta región anatómica del tipo “teléfono” y “submarino húmedo”. Respecto del daño en el maxilar superior, el mecanismo de causalidad corresponde a la agresión sufrida por la víctima relatada por la misma, consistente en un golpe de culata con un fusil. Finalmente, en relación al daño psiquiátrico la condición de estrés extremo a que fue sometida la víctima por cerca de un año, siendo un menor de edad, explica lógicamente y sin lugar a dudas el mecanismo causal de este daño. Esto lo afirma en razón de los elementos de análisis pericial tenidos a la vista que fundamentan su informe y de la evaluación médica de la propia víctima y en base a la ciencia que profesa.

La segunda testigo, doña María Paulina Salas Sáez, en cuanto al punto N° 1 de prueba, señala que porque revisó el listado Valech, dentro de sus labores cuando recibe un paciente que solicita evaluación de secuelas de tortura debe revisar si está en el listado y este paciente aparece en el listado. Es efectivo que el demandante fue reconocido en calidad de víctima en el



«RIT»

Foja: 1

informe de víctima de prisión y tortura política del 2004, tenemos tres informes y los dividen en primera postulación, que eran los pacientes que estaban en el útero, otros son pacientes que entraron en la segunda postulación que esa fue hace 4 años atrás y el demandante está en el informe Valech N° 1. Todo esto le consta porque lo vio, además de tener los 4 listados en su computador y es obligatorio para ella sacar una copia del informe y dejarlo en la ficha, la copia del listado en que él aparece esta adjunto a su ficha clínica porque si el no sale en el listado la testigo no lo puede atender por secuelas de torturas

Repreguntada para que señale cuáles son las funciones que cumple que le permiten saber de la información mencionada con anterioridad, contesta que desde el año 2006 es el médico integral de PRAIS oriente, con la función de evaluar los pacientes que solicitan ser acogidos a la ley 19.992 artículo 10, en que el Estado se hace cargo del tratamiento y rehabilitación de las secuelas de tortura, además desde el año 2015 es el médico gestor y contralor de la unidad. Del 2006 al 2010 solo cumplió funciones administrativas y de estudio en que se capacitó en la ley y en las vías de gestión que podía acceder para los pacientes, del 2010 a la fecha se le permite ver pacientes con lo cual tiene 22 horas de atención y once horas de gestión, en las 22 horas de atención ve alrededor de 20 pacientes diarios de los cuales consultan por secuela de tortura alrededor de 1 o 2 por día.

Repreguntada para que diga si sabe los antecedentes conforme a los cuales el demandante fue incluido en el informe Valech, expresa que para ingresar al informe Valech el paciente debió declarar en la comisión Valech, tiene entendido que se le toma una declaración, deben presentar testigos y además de documentos certificando su detención, posterior a esto sus antecedentes van a una comisión quien autoriza su ingreso a dicha lista y este paciente pasó por todo este proceso logrando ingresar al listado Valech, ellos trabajan con el listado y de acuerdo a la ley que manejan en la unidad PRAIS que es la 19.992, artículo 10, el paciente que se encuentra en dicho listado se asume torturado y su misión es de acuerdo al relato que el paciente da hacer un paralelo con las secuelas actuales y con los posibles agentes que provocaron dichas secuelas. Este paciente les realizó su relato en el año 2009, cuando solicitó atención. Posterior al examen físico y con los antecedentes



«RIT»

Foja: 1

médicos que traía se pudo asumir, que es lo que permite la ley, que entraban dentro de las secuelas de tortura los siguientes diagnósticos:

- 1) Desdentado parcial traumático y progresivo por posible efecto de corriente eléctrica.
- 2) Hipoacusia bilateral posiblemente origen traumático acompañado de tinnitus crónico.
- 3) Síndrome metabólico con componente de diabetes mellitus tipo 2, más hipertensión arterial y dislipidemia
- 4) Cervicalgia y lumbalgia crónica secundaria a traumatismo de alto impacto o tracción o atrición.

Explica que con eso fue lo que ingreso en el año 2009 y reconsultó en el año 2016, hasta la fecha donde se agregaron otros diagnósticos más.

En cuanto al punto N° 3 de prueba, señala que actualmente desde el año 2016 se agregaron otras patologías. El paciente informa que en el periodo del 2005 al 2016 que no consultó sus servicios presentó pancreatitis aguda, gastritis crónica y proctalgia. Con estos antecedentes solicitaron un estudio completo y se encontraron que a sus diagnostico se le agregaban:

- 1) Gastritis crónica con signo de una ulcera gástrica cicatrizada.
- 2) Polipo colónico hiperplásticos.
- 3) Leucemia mieloide crónica.

Afirma que estos diagnósticos entran dentro de los parámetros de patologías de carácter autoinmune, los pacientes sometidos a estrés severo y corriente eléctrica presentan una disminución de los genes que permiten regular la expresión de oncogenes y procesos de intercambio genético que permiten la expresión de enfermedades que generan anticuerpos contra el mismo organismo. Esta desregulación es la que permite que se presenten enfermedades como las que acaba de nombrar en los puntos 1,2 y 3.

Sostiene que de acuerdo a la ley 19.992, artículo 10, se debe dar solución a los pacientes de sus patologías en primera instancia en toda la red del sistema público de salud, con los tiempo de espera de dicha ley, hasta el momento solo se han evaluado en forma monetaria su patología oral, que tuvo un costo de rehabilitación de alrededor de \$8.000.000, el resto de las patologías están sin solucionar pero la de más alto costo en estos momentos es



«RIT»

Foja: 1

el compromiso que tiene en columna cervical y lumbar, que implica posible daño neurológico y son patología de alto costo.

Repreguntada para que diga si tiene conocimiento de los costos que significaría para el demandante asumir de forma particular las intervenciones que le permitan recuperarse de las patologías que presenta o mitigar su grado de avance, contesta que la patología cervical y lumbar, incluyendo cirugías, kinesioterapia, elementos necesarios para su rehabilitación como bastones, corsé, cuello ortopédico y catre clínico, pueden ser alrededor de unos \$60.000.000.-; los audífonos actualmente no están solucionados y requeriría unos \$10.000.000.-; el síndrome metabólico es entregado en atención primaria como AUGE, así que no tiene problema de financiamiento, la leucemia se está tratando en el servicio de hematología donde le están proporcionando el tratamiento de quimioterapia, la gastritis, los cólicos polínicos son tratados actualmente con dieta, ya que los fármacos que debiera usar son incompatibles con el tratamiento de quimioterapia.

En cuanto al punto N° 4 de prueba, expone que desde que recibió al paciente en el año 2009 hasta el 2016 que los vuelve a reconsultar se encuentra con un paciente severamente deteriorado, muy envejecido, con disminución de su fuerza vital, pero con un alto sentimiento de impotencia e injusticia. De todas las patologías con las cuales la testigo lo ingresó en el 2009 de acuerdo a los tiempos de red de salud no se solucionó ninguna, lo que produce más sentimientos de rabia que en conjunto con la patología misma provocan la aparición de patologías autoinmunes, específicamente el cáncer, que es lo que ven en todos estos pacientes. El demandante es un caso característico de deterioro progresivo crónico y terminal. Con muy mal pronóstico y sin duda que no se logre dar solución a sus problemas lo menoscaba más. En el año 2016 se logró colocar su dentadura por un convenio del servicio de salud oriente, con el servicio de salud norte en conjunto con Fonasa. La leucemia también fue de difícil incorporación a tratamiento, si bien ella pudo evaluar un hemograma alterado, está obligada a cumplir el flujograma del servicio de salud, con lo cual lo derivó a atención primaria, Cesfam Félix de Amesti, donde fue derivado a médico general y posteriormente a internista que realiza evaluaciones dentro del mismo Cesfam, el cual descartó su derivación a especialista hematólogo, con indicación de



«RIT»

Foja: 1

controles periódicos de hemograma. Por una gestión personal del paciente y su insistencia logró ser visto por hematóloga del Hospital Salvador, quien fue quien realizó y confirmó el diagnóstico de leucemia y lo incorporó a quimioterapia. Afirma que con lo anterior quiere evidenciar lo dificultoso que ha sido para este paciente realizar sus tratamientos, sobre todo de este diagnóstico que implica riesgo vital, por lo tanto es una evidencia de que sus patologías han tenido un impacto severo en su vida teniendo un alto costo para él del punto de vista personal, familiar, social y laboral.

Repreguntado para que diga la testigo qué tipo de dolores le significa la dolencia a la que hizo referencia el actor y por cuánto tiempo, responde que el tinnitus provoca cefalea y sensación de mareo que ha evidenciado reiteradamente el paciente, esto está presente desde que los consultó en el 2009 a la fecha.

Añade que los dolores cervicales y lumbares son invalidantes, ha llegado a la consulta con elementos ortopédicos como faja y bastón caminando con mucha dificultad, estos están presentes desde el 2009 hasta la fecha en que han tenido una evolución progresiva.

Afirma también que el tratamiento de la leucemia produce efectos secundarios que son, sequedad de la piel, descamación de la piel, edema de párpados con hiperlaxitud del tejido parpedral, lo que cae sobre el globo ocular y altera la visión.

Indica a su vez sequedad de boca con presencia de lesiones de tipo ulceroso. Gastritis crónica que agrava su cuadro de gastritis de base. Además, de mialgias y artralgias que se han intensificado en estos últimos seis meses. Todos estos síntomas están presente desde el 2016, en que se realizó el diagnóstico de leucemia y en este último mes se agregó la fatiga crónica y el daño de fibra muscular comprobado por exámenes de laboratorio.

Repreguntada para que diga en qué consisten los costos familiares, sociales y laborales que ha tenido que sufrir el demandante, señala que pasó de ser un padre apoyador y protector de su familia a ser un dependiente en que la familia, su esposa e hijos lo tienen que cuidar a él. Perdió su independencia en el sentido de que actualmente no se puede transportar solo, ya que la fatiga muscular se lo impide. No puede trabajar, con lo que pasó a depender del trabajo de su esposa, con esto mismo no puede colaborar en



Foja: 1

cuidar a sus hijos cuando estos han presentado enfermedades severas, ya que no puede ejercer ayuda física ni económica. Del punto de vista social pasó de ser una persona absolutamente autovalente y vigente a ser un dependiente, lo cual lo retrae en su hogar, de acuerdo a lo que ha ido evaluando en las consultas de estos últimos meses.

En cuanto al punto N° 5 de prueba, expresa que de acuerdo a la ley 19.992, artículo 10, debe verificar que el paciente este ingresado a la comisión Valech, lo cual el paciente cumple, esto implica que se asume tortura. Indica que no tiene autorizado reinterrogar al paciente ni poner sus dichos en duda, su obligación es derivarlo al especialista que corresponda y consultar de acuerdo si la lesión le impresiona como antigua, causal y si pudiese ser efecto de tortura. Afirma que de acuerdo a su experiencia desde el año 2006, en que es el médico más antiguo en Chile trabajando en este tema y de acuerdo a la información encontrada en documentos de tortura en otros países con secuela a largo plazo, más de 40 años las lesiones que se encuentran en este paciente concuerdan a los posibles modalidades de tortura más frecuentemente utilizadas, registradas en la literatura con respecto a los hechos ocurridos posterior al once de septiembre de 1973.

1) Desdentado parcial traumático y progresivo: en el año 2009 tenía ausencia de la parte anterior de la arcada dentaria superior e inferior, con relato de que estas piezas anteriores fueron traumatizadas con una culata con lo cual las pierde de forma automática y las que quedaron luxadas se fueron perdiendo de manera paulatina. Esto es frecuente en los pacientes que han recibido corriente eléctrica, por lo que se destruye el nervio dentario y se atrofian los elementos de sostén de los dientes, junto con esto en la reclusión no se le entregaban las facilidades de un aseo dental diario y frecuente, lo que favorece la enfermedad periodontal que evoluciona de manera progresiva a la pérdida de las piezas dentarias, que es lo que se ve en todos estos pacientes y es lo que se ve en el caso.

2) Hipoacusia bilateral: el paciente relata en su ingreso del año 2009 haber sido víctima de un método conocido como “telefonazo”, en que con un elemento contundente se le golpeaba en forma conjunta las dos regiones auditivas, con esto aparte del traumatismo se provocaba una atrición de la zona y el aire contenido en el conducto auditivo, encontrando en forma



Foja: 1

frecuente en estos pacientes un estadillo de la membrana timpánica por el aumento de la presión, que es lo que se encuentra también en este paciente. El tinnitus puede ser originado tanto por el traumatismo sobre el tejido nervioso, tanto como el daño de la corriente eléctrica sobre el mismo nervio auditivo.

3) Síndrome metabólico: hipertensión, diabetes y dislipidemia. Estos pacientes eran sometidos a situaciones de privación de sueño, según relato permanecían de pie largas horas sin dormir, ya que eran golpeados o se les colocaba corriente para evitar su descanso. La privación del sueño produce alteración en el metabolismo con un mal manejo de los lípidos teniendo un aumento severo y de difícil manejo del colesterol total, disminución del colesterol HDL y aumento de triglicéridos, lo que lo pone en mayor riesgo cardiovascular.

Añade que la hipertensión arterial también es frecuente observarla en pacientes que han sido sometidos a estos procesos, se produce por un aumento de la resistencia de la pared arterial a la llegada del gran flujo de salida de sangre del corazón, junto con esto por el estrés se producen episodios de taquicardia y arritmia, y el demandante se encuentra actualmente en tratamiento por hipertensión.

También refiere, respecto de la diabetes, que el estrés y la privación de sueño producen un mal funcionamiento del páncreas que comienza a fabricar insulina de mala calidad, por lo tanto el paciente presenta un aumento de la producción de insulina. En la literatura este evento es frecuente en los pacientes con estos antecedentes, el demandante partió con una resistencia a la insulina en el 2006 y actualmente ya está en categoría de diabetes mellitus tipo II, lo que significa una progresión de la enfermedad.

4) Cervicalgia y lumbalgia crónica: era frecuente en estos pacientes someterlos a largas horas de pie, o colgamiento desde las muñecas por largas horas o colocarlos en recintos cerrados pequeños acostados en posición de cubito ventral donde terceras personas saltaban sobre ellos o apilaban a varias personas en forma como si fueran pisos de una torre, este mecanismo provoca daños principalmente en la columna cervical y lumbar que son las que tienen curvatura de concavidad hacia dorsal. Al provocar peso o fuerza sobre estas curvaturas son sometidas a mayor presión sobre las superficies del suelo,



Foja: 1

produciendo con mayor facilidad fracturas, luxaciones, rotura de ligamento o discos intervertebrales, este también era un mecanismo frecuente descrito en la literatura. En el demandante, al ser estudiado en el año 2009 y posteriormente reestudiado en el 2016, se confirmó la presencia de: discopatías severas de C5 a C7 y de L3 a L5, con listesis vertebral, raquiestenosis. Patologías que producen dolor severo y crónico con disminución de la movilidad de forma progresiva de sus extremidades superiores e inferiores influyendo claramente en su deambulación y posición bípeda.

5) Gastritis crónica: el estrés, la depresión y los sentimientos de menoscabo provocan un aumento de la producción de ácido gástrico, junto con la disminución de las barreras naturales de protección de la mucosa gástrica como son el mucus y la regeneración celular, esto favorece que los pacientes presenten más gastritis y la presencia de *helicobacter pylori*, que es una bacteria que favorece la producción de úlceras gástricas y por lo tanto, de no ser tratadas, favorece la presencia de cáncer gástrico. Siendo esto también un antecedente frecuente en la literatura de estos casos. Al demandante se le realizó endoscopia digestiva alta, confirmando la presencia de gastritis crónica, la cicatriz de una úlcera gástrica con un repliegue cicatrizal aumentado de tamaño, lo que implica una agresión del jugo gástrico de larga data.

6) Polipo colónico hiperplástico: estos pacientes no tenían facilidades para acudir a los servicios higiénicos cuando presentaban la necesidad o no tenían una dieta adecuada. La permanencia prolongada de las heces en la última porción del intestino grueso y el recto, y posiblemente también la manipulación del área genitoanal con elementos de tortura favorece las lesiones de la mucosa del colon y rectal, lo que se evidencia con la formación de polipos que no de ser resecados evolucionan hacia lesiones de tipo neoplásicas. El demandante presentó en el año 2016 polipo hiperplástico en última porción del colon, el que fue resecado como medida preventiva.

7) Leucemia mieloide crónica: este corresponde a un cáncer de tipo hematológico, el cual va a ser favorecido por el estrés, como por la posible aplicación de corriente eléctrica por la expresión de oncogenes y disminución de los mecanismos reguladores. El demandante cumple los parámetros descritos en la literatura de los pacientes que han vivido estas experiencias.



«RIT»

Foja: 1

La tercera testigo doña María Leontina Díaz Urrutia, en cuanto al punto de prueba N° 3, señala que la primera vez que conoció al demandante estaba enfermo en una cama, en diciembre del año 1974, él estaba en una pensión solo en Cauquenes. La testigo participaba en un grupo católico el cual el Sr. Domingo Herrera, quien era el cura párroco que había formado ese grupo, les contó sobre dos personas que estaban relegadas en Cauquenes, y el cura invitó al grupo y con ello a la testigo a visitar a uno de ellos, el que se sentía mal y estaba enfermo, se refiere al demandante. Indica que llegaron a la pensión ella y otros jóvenes, eran tres personas que fueron, andaba el Sr. Cura también. Lo que supo es que estaba muy mal de su columna, ya que llevaba unos días acostado en su cama, esto lo sabe porque lo pudo ver, tenía dolor en su espalda, columna y en su mandíbula, esto lo pudo constatar con sus sentidos, además estaba demacrado, en verdad daba mucha pena la persona. Igual estaba con miedo, porque los intimidaban demasiado, ya que andaban por la calle los militares y tenía mucho miedo por la situación y como lo vio, el cura les decía que no sintieran miedo ya que el Sr. Herrera, el cura, era muy positivo. El día de la visita, diciembre de 1974, en todo caso antes de la Pascua, ya que estaban con el espíritu navideño, pudo hablar con él, pese a que hablaba poco, y habló acerca de su estado de salud. El Sr. Herrera, el cura párroco, hablaba más con don Darío, y a él le confió y le contaba todo lo que realmente le había pasado y el Sr. Herrera les comentó a ellos y les dijo que era un joven que venía de Punta Arenas, relegado a Cauquenes y que tenía 19 años y que había sido torturado y venía directamente del Hospital Naval de Punta Arenas, ahí había sido hospitalizado por las torturas que había sufrido en Isla Dawson, eso es lo que les contó el cura Sr. Herrera. Les contó el Sr. Herrera que el Sr. Román había sufrido golpes en la columna, que estuvo un año sufriendo torturas en Isla Dawson, golpes en la columna, en su rostro y simulacros de fusilamiento, eso fue lo que les explicó esa vez, les dijo el Sr. Herrera que fuera del color político que fueran había que apoyarlo porque era un ser humano. De ahí partieron siempre, cuando él se encontraba postrado por su problema de columna, a llevarle almuerzo al lugar o pieza de la pensión donde él estaba. El Sr. Román Carrasco cuando no podía asistir por sus limitaciones que tenía, iba a almorzar a la parroquia, la testigo con otras personas le llevaban el



Foja: 1

almuerzo y lo acompañaban durante el almuerzo. Luego el Sr. Román Carrasco, ya con más confianza, les contó lo mismo que ya antes les había contado el Sr. Herrera, cura párroco. También les contaba de su familia, de su padre y madre, de su calidad de hijo único y lo que le había pasado en la Isla Dawson. Aclara que en Cauquenes estuvo en la pensión desde diciembre de 1974 hasta julio de 1975 aproximadamente, y todo ese tiempo hicieron lo mismo, apoyarlo. Después la testigo se casó en el año 1976, luego el demandante se fue a Punta Arenas ya que se le levantó la relegación, y viajó a Punta Arenas a su casa, la casa de sus padres a Punta Arenas y en ese tiempo se siguieron comunicando con el Sr. Herrera, cura párroco, por carta donde le contaba que iba a iniciar sus estudios e iba a dar la Prueba de Aptitud Académica. Después se vino al norte, le parece que a Valparaíso, a estudiar una carrera universitaria, eso les dijo el Sr. Herrera, cura párroco. Después la testigo se casó en Punta Arenas en diciembre del año 1976, ahí conoció Punta Arenas y conoció a sus papás. Y esa vez fue la última vez que tuvo indicios de él, después no lo vio nunca más, ya que se casó en Punta Arenas con un uniformado.

Repreguntada para que diga cómo evolucionó el estado de salud de don Darío Román entre diciembre de 1974 hasta la última vez que lo vio en 1976, responde que en Cauquenes desde el día que lo conoció y hasta que se fue, él continuaba con sus parálisis en la columna cuando se caía y no tenía movimiento, él continuó siempre así en Cauquenes. Y cuando la última vez que lo vio en Punta Arenas se mantenía con un psiquiatra que lo estaba viendo, pero él no estaba al cien por ciento. Eso fue lo que le contaron sus papás y vio el día que lo visitó en Punta Arenas, pero sano no estaba.

Repreguntada para que diga si a su juicio el estado de salud que presentaba el Sr. Román coincidía con el relato acerca de lo que le había pasado, manifiesta que totalmente, ya que estaba muy mal.

Agrega que el Sr. cura y luego el Sr. Román lo corroboró, que le habían aplicado corriente eléctrica en forma de tortura, eso durante todo el período que estuvo en la isla Dawson.

En cuanto al punto N° 4 de prueba, expresa que el daño moral era muy severo en él ya que, por ejemplo, él comentaba que no podía estar cerca de una cerca alambrada, ya que eso le provocaba pánico y mucho temor. No



«RIT»

Foja: 1

quería salir de la habitación al exterior ya que pensaba que lo iban a detener por cualquier cosa y se lo iban a llevar de nuevo a torturarlo y tenerlo prisionero. Él no hablaba mucho con nadie, hablaba con pocas personas, ya que pensaba que lo podían delatar y volverlo a detener.

Repreguntada para que diga si sabe si el Sr. Román realizó alguna actividad de estudio o de trabajo cuando estuvo en Cauquenes, y si sabe por qué, responde que no, por su estado de salud no podía realizar ninguna actividad.

Repreguntada para que diga si sabe qué vínculo familiar mantenía el Sr. Román en ese tiempo, el que estuvo en Cauquenes, y de qué tipo, afirma que sí mantuvo vínculo con sus padres por teléfono, lo llamaba la mamá y el papá por supuesto. Sus padres le costeaban la pensión donde él estaba y le escribían.

Repreguntada para que diga si sabe si lo visitaron durante ese período en Cauquenes, señala que supo que la mamá lo visitó, unos días estuvo con él ahí.

QUINTO: Que, por su parte, la demandada acompañó en autos los siguientes documentos, en forma y sin objeción acogida:

En presentación de 17 de mayo de 2018:

1.- Copia de oficio N° 47627/2017 del Departamento de Transparencia y Documentación del Instituto de Previsión Social, de 16 de mayo de 2017, que informa de los beneficios percibidos por el demandante.

SEXTO: Que, finalmente, a solicitud de la parte demandante de fecha 18 de abril de 2018, se recibieron en autos los siguientes oficios:

1.- Con fecha 29 de junio de 2018, oficio remitido por Hospital FFAA “Cirujano Guzmán”, Armada de Chile, en el cual se indica que el establecimiento no posee antecedentes clínicos de don Darío Román Carrasco.

2.- Con fecha 23 de julio de 2018, oficio remitido por el Coordinador del Programa PRAIS, Servicio de Salud Metropolitano Oriente, al cual se adjunta Informe de Daño Médico, elaborado por la profesional Paulina Salas Sáez, e Informe de Daño Psicológico, elaborado por con Joaquín Carrasco Bahamonde, en relación con el demandante.



«RIT»

Foja: 1

3.- Con fecha 8 de agosto de 2018, oficio remitido por Armada de Chile, en el que se indica que consultado con el Hospital de las Fuerzas Armadas “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas, se comunicó que no cuenta con información de las bitácoras requeridas, como tampoco existe información referida al demandante.

SÉPTIMO: Que, a fin de resolver el asunto sometido a conocimiento de esta magistratura, en primer lugar se debe establecer las circunstancias de la detención alegada por el actor, y en particular, si existió participación de agentes del estado y si se encuentra reconocido como víctima de violación a los derechos humanos por algún órgano del Estado o por alguno de los informes de las Comisiones creadas por éste para dicho efecto.

OCTAVO: Que a su respecto, con fecha 18 de abril de 2018, fue acompañado copia de la página 727 del listado de Prisioneros Políticos y Torturados, correspondiente al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de noviembre de 2004, en el cual el actor aparece reconocido como víctima de prisión política y tortura con el N° 21.501.

Por su parte, también se valió de prueba testimonial al efecto, consistente en las declaraciones de don Bernardo Javier Morales Catalán y doña María Paulina Salas Sáez, quienes refieren a su vez que les consta el reconocimiento del actor como víctima en el referido Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o Informe Valech.

NOVENO: Que, de acuerdo a lo señalado precedentemente, se tiene por acreditado que el demandante fue víctima de prisión política y tortura por parte de agentes del Estado de Chile, siendo, en consecuencia, víctima de la violación de sus derechos humanos.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, huelga señalar que el demandado Fisco de Chile no controvierte la calidad de víctima de prisión política y tortura del demandante ni la participación de los agentes del Estado en tales hechos, de manera que estando acreditada la calidad referida, habrá de estarse a los hechos expresados en la demanda.

DÉCIMO: Que, estando acreditadas las circunstancias señaladas en el considerando anterior, corresponde dilucidar y resolver las alegaciones sostenidas por el Consejo de Defensa del Estado en su contestación.



DÉCIMO PRIMERO: Que la demandada opuso en primer término la excepción de reparación satisfactiva, por haber sido ya indemnizado el demandante.

DÉCIMO SEGUNDO: Que al respecto cabe señalar que el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos durante el régimen militar, a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Que, al respecto, la ley 19.992 y sus modificaciones, correspondiente a las asignaciones entregadas en razón de los reconocimientos efectuados por la Comisión Valech a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, situación en la que se encuentra el demandante, y las reparaciones simbólicas a que alude el demandado, constituyen más bien un beneficio de carácter social tendiente a cumplir, además, con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, más no una indemnización de daño material y/o moral sufridos por las víctimas de violación a los derechos humanos, pues no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar los sufrimientos y consecuencias de los actos de los que se trata, lo cual lleva a desestimar las alegaciones deducida por la parte demandada.

DÉCIMO TERCERO: Que, seguidamente cabe hacerse cargo de la excepción de prescripción extintiva civil opuesta por el Fisco de Chile.

DÉCIMO CUARTO: Que en este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas, por Resolución N° 2.391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, en vigor desde el año 1970, aprobó la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad”, la que dispuso:

“Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuren entre los delitos de derecho internacional más grave.

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y



«RIT»

Foja: 1

puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacionales.

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes.

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal.

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1º: Son imprescriptibles:

a) Los crímenes de guerra, según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de derecho internacional de Núremberg confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra de 1949.

b) Los crímenes de lesa humanidad. Cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de Derecho Internacional de Núremberg y confirmadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el apartheid y el genocidio.”

A continuación, el artículo 2º de este instrumento declara que la Convención se aplica, sin distinción, a las autoridades del estado y a particulares, ya sea que hayan participado como autores, cómplices o hayan incitado directamente a la perpetración de esos crímenes y cualquiera sea el grado de desarrollo.

DÉCIMO QUINTO: Que con posterioridad, en el año 1973, la misma Asamblea General aprobó la Resolución N° 3.074 (XXVIII), de fecha 3 de diciembre de 1973, “Principios de cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, en la que señala lo siguiente:



“Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.”

DÉCIMO SEXTO: Que, en este sentido, se debe tener presente que si bien la citada Convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, surge en la actualidad con categoría de norma de *ius cogens*, o principios generales del derecho penal internacional, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra prescrita por la Constitución Política de la República (artículo 5, inciso segundo), de modo tal que el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra, así como el aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos, resulta indiscutible e imperativo para los tribunales nacionales.

A mayor abundamiento, siendo nuestro país un Estado Parte de la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra obligado a cumplir de buena fe las resoluciones de la Asamblea General.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, además, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos –artículos 4 y 5– como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas –artículos 7 al 10–, ratificados por Chile e incorporados a su derecho interno, prohíben en la práctica los crímenes contra la humanidad.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en relación con la supremacía de los tratados internacionales sobre el derecho interno, es preciso hacer constar que la modificación al antes citado artículo 5° de la Constitución Política de la República tuvo por objeto precisamente reforzar la protección de los derechos humanos, al disponer como deber de los órganos del Estado, respetar y promover tales derechos.

DÉCIMO NOVENO: Que cabe reiterar que la presente acción es de carácter reparatoria por derivar de la violación a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad, la que se rige por preceptos del derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad, la que debe regir tanto en el ámbito penal como en el civil.



De seguir la tesis de la demandada, esto es, aplicar a este caso la prescripción del derecho privado, implicaría permitir que el Estado evitara cumplir su deber y se negaran derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, por quien, como se señaló precedentemente, es el constitucionalmente obligado a resguardarlos, lo que lleva a rechazar la excepción de prescripción.

VIGÉSIMO: Que, establecido lo anterior y rechazada la excepción de prescripción, habrá de emitirse pronunciamiento respecto de los perjuicios demandados, los cuales hace consistir en daño por concepto de reparación de salud o daño emergente, el que avalúa en la suma total de \$62.801.617, y en daño moral, el que avalúa de la suma total de \$1.032.000.000.-

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en cuanto al daño por concepto de costos por reparaciones de salud, los hace consistir en los siguientes conceptos: a) diagnóstico e imagenología respecto de lesión en columna vertebral y cervical, por un costo de \$2.850.000.-; b) tratamiento y cirugías, respecto de lesiones en columna vertebral, cervical y lumbosacra, por un valor de \$21.288.617.-; c) rehabilitaciones, respecto de lesiones de columna vertebral, cervical y lumbosacra, el que avalúa en \$4.935.000.-, d) exámenes y controles postoperatorios, respecto de lesiones de columna vertebral, cervical y lumbosacra, el que avalúa en la suma de \$11.200.000.-; e) reparación de daño ótico, respecto del cual indica que deberá realizarse un implante cloquear, procedimiento que avalúa en la suma de \$5.828.000.-; y f) reparación daño sistema digestivo, el que avalúa en la suma de \$16.700.000.-

Que, primeramente, en cuanto a la existencia de tales daños –a saber, lesiones en columna vertebral, cervical y lumbosacra, daño ótico y daño al sistema digestivo– y su relación con los hechos que fundan la demanda, se vale de prueba testimonial y documental, incluyendo informes remitidos por Coordinador del Programa PRAIS, Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

Así, acompaña primeramente una serie de informes de exámenes, certificados y solicitudes de interconsulta emitidos desde el año 2010 a la actualidad, dentro de los cuales cabe destacar certificado emitido por médico contralor de interconsultas, PRAIS Oriente, doña Paulina Salas Sáez, de fecha 6 de enero de 2017, en el que se indica como diagnósticos de ingreso del demandante, entre otros: discopatías de columna cervical C4-C5 con HNP y



Foja: 1

lumbar L3-L4 y L4-L5, hipoacusia sin tratamientos, gastritis crónica en tratamiento y pancreatitis en control.

Por su parte, acompaña informe pericial forense clínico, acompañado con fecha 3 de mayo de 2017, emitido por el Dr. Bernardo Morales Catalán, médico cirujano, quien comparece en autos como testigo, reconociendo y ratificando el informe. Se indica que “en el caso de las lesiones provocadas en la columna vertebral tanto a nivel cervical como lumbar, estas tienen como mecanismo etiológico el trauma directo recibido en la zona durante su período de prisión ilegal, ya ampliamente relatadas por la víctima y referidas en el cuerpo de este peritaje”.

Agrega a su vez que “en el caso del tinnitus, el trauma acústico de alta intensidad con trastornos súbitos de la presión acústica como ocurre en el tipo de tortura llamada teléfono, es potencialmente causante de un gran número de lesiones que originan daño anatómico y funcional de gravedad variable que en el caso de la víctima resultaron de alta severidad y con lesiones permanentes e irreversibles”.

Adicionalmente, se recibió en autos informe de fecha 11 de junio de 2018, remitido por Programa PRAIS Oriente, también elaborado por la Dra. Paulina Salas Sáez, quien a su vez comparece como testigo en autos. Se expresa que el demandante presenta dorsalgia y lumbalgia en estudio, dándose cuenta de “síntomas de dolor, pérdida de movilidad y sensaciones parestésicas, sensaciones de corrientes dolorosas, de frío intenso y que además presentan una mala respuesta al tratamiento médico, además de impotencia funcional de extremidades superior e inferiores”, agregándose que el diagnóstico actual es de posible discopatía de L3-L4 y L4-L5, con posibles hernias de núcleo pulposo. Se indica que es habitual observar que las personas que sufrieron estos mecanismos de tortura suelen resultar con daños en la región del conducto medular de las vértebras, lo que a su vez produce lesiones de tipo compresivas y neuropatías.

Se recoge también en el informe que el paciente presenta lesiones en materia auditiva, correspondientes a hipoacusia (sordera) y tinnitus, expresándose que se evalúa una alta probabilidad de que tales lesiones sean producto del mecanismo y magnitud de los golpes que sufrió en la región ótica, en contexto de prisión y tortura.



Se señala a su vez en el informe que el demandante presenta una larga historia de gastritis crónica, con síntomas de pirosis y dolor cólico intermitente en epigastrio. Se precisa al respecto que las gastropatías crónicas son frecuentemente observadas en pacientes expuestos a estrés continuo, lo que figura en los antecedentes del paciente.

Por último, también contó con prueba testimonial, consistente en las declaraciones de los ya referidos testigos don Bernardo Morales Catalán y doña Paulina Salas Sáez, y adicionalmente en la declaración de doña María Díaz Urrutia, quien señala que conoció al demandante en diciembre de 1974, en Cauquenes, afirmando que “estaba muy mal de su columna, ya llevaba días acostado en su cama, esto lo sé porque lo pude ver, tenía dolor en su espalda, columna y en su mandíbula, esto lo pude constatar con mis sentidos”.

De conformidad con lo anterior, y analizada la prueba de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, puede tenerse por acreditado que el demandante presenta lesiones en columna vertebral, cervical y lumbosacra, daño ótico correspondiente a hipoacusia y tinnitus y daño en el sistema digestivo en la forma de gastritis, afecciones que surgen como consecuencia de los hechos descritos en la demanda, recogidos por su parte en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o Informe Valech, y que en definitiva motivaron la incorporación del demandante en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, para acreditar el costo de reparación de las lesiones de columna vertebral, cervical y lumbosacra, acompaña copia de certificado del traumatólogo Marcelo Pérez, que lo atiende en Clínica Meds, que da cuenta que las enfermedades a nivel cervical y lumbar que presenta el demandante necesitan de cirugía en ambos segmentos. Además, acompaña presupuestos N° 5016332 y N° 5016332, de fecha 26 de diciembre de 2017 y 9 de enero de 2018, respectivamente, con diagnóstico cervicobraquialgia, el primero, y estenorraquis lumbar, el segundo, ambos de Clínica Meds y por un valor cada uno de \$10.034.044 en clínica, \$8.750.000 en honorarios médicos, además, de señalar que adicionalmente se debe considerar elementos de Osteosíntesis Cervical por \$5.200.000. Osteosíntesis Lumbar \$14.100.000 y procedimientos potenciales evocados código 11-01-011 \$260.000 por hora.



«RIT»

Foja: 1

Que, la referida prueba documental permite acreditar el monto demandado en la letra b) por costos de reparación de salud, referente a “Tratamientos y Cirugías”, lo que lleva a acoger la demanda en este punto por la totalidad de la suma demandada, esto es, la suma de \$21.288.617.

Que en cuanto a la alegación del demandado que lo solicitado resulta improcedente por tener el actor acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial Prais, será desestimada, por cuanto la testigo doña María Paulina Salas Saez, quien es médico integral de Prais Oriente, señala que en primera instancia en toda la red del sistema público de salud se debe dar solución a estos pacientes, con los tiempos de espera de la ley 19.992, agregando que la patología cervical y lumbar aún se encuentra sin solucionar, que es la que tiene el más alto costo y que implica posible daño neurológico. Por otra parte, la demandada no rindió ninguna prueba en orden a acreditar que la intervención del actor se encuentre programada en algún establecimiento de salud pública, en relación con las prestaciones otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud.

VIGÉSIMO TERCERO: Que en lo referente a las letras a) Diagnóstico e imagenología, c) Rehabilitación y d) Exámenes y controles post operatorios, la parte demandante no rindió ninguna prueba documental en orden a probar las sumas demandadas por estos conceptos.

Que si bien se valió de prueba testimonial, cabe señalar que las declaraciones de don Bernardo Morales Catalán y de doña María Díaz Urrutia, no se refieren a los posibles valores que tendrían los tratamientos a los que debería someterse el demandante por las lesiones en la columna.

En cuanto a doña Paulina Salas Sáez, señala que los costos de reparación de la patología cervical y lumbar, incluyendo cirugías, kinesioterapia y elementos necesarios para la rehabilitación, pueden ser alrededor de \$60.000.000.-, declaración a la que se le restará valor probatorio, por no guardar relación con los montos señalados en la demanda por estos conceptos y carecer de la precisión suficiente en relación a los costos.

Por consiguiente, al no haber probado los montos demandados por concepto de diagnóstico, imagenología, rehabilitaciones, exámenes y controles post operatorios, la demanda será rechazada en este punto.



«RIT»

Foja: 1

VIGÉSIMO CUARTO: Que, para acreditar el costo de reparación del daño ótico, acompaña primeramente cotización N° 63, emitida por Auditron Chile, de fecha 19 de mayo de 2017, por concepto de “audífono digital, 17 canales WDRC”, por el valor más IVA de \$2.465.000.-, documento al que se le restará valor probatorio, por cuanto el concepto demandado se hizo consistir en un procedimiento quirúrgico para realizar un implante cloquear y no de un audífono digital, como contempla el presupuesto revisado.

En cuanto a la prueba testimonial, los testigos don Bernardo Morales Catalán y doña María Díaz Urrutia no refieren costo de reparación en relación a la reparación del daño que se revisa; por su lado, la testigo doña Paulina Salas Sáez también se refiere a audífonos, concepto que no es el demandado, por lo que a su declaración también se le restará valor probatorio.

Por consiguiente, la parte demandante no acompañó ninguna prueba en orden a probar el único ítem demandado para el daño auditivo, consistente en la realización de un implante cloquear, por lo que la demanda debe desestimarse en este punto.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en cuanto al costo de reparación de daño al sistema digestivo, la parte demandante no rindió ninguna prueba en orden a probar los valores de las atenciones médicas e intervenciones quirúrgicas en relación a este padecimiento, por lo que no queda más que rechazar lo pedido por este concepto.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en cuanto al daño moral demandado, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular, debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, y por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

Así, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.



«RIT»

Foja: 1

Por otra parte, el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento o dolor que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, como algunos autores lo sostienen, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral, el demandante se valió, primeramente, de informe pericial forense clínico, acompañado con fecha 3 de mayo de 2017, emitido por el Dr. Bernardo Morales Catalán, médico cirujano, quien comparece en autos como testigo, reconociendo y ratificando el informe. Se expresa en el informe que “resulta obvio y evidente que tanto la historia victimizante de Darío Román que se ha prolongado en el tiempo más allá del período de la dictadura en Chile por cuanto la discriminación laboral, social y estigmatización política de la que ha sido objeto y perseguido, como la imposibilidad de acceder a garantías de atención de salud consagradas en la ley, con resultados oportunos y eficientes, han impactado y afectado gravemente su salud mental, expresados como stress post traumático de carácter irreversible, y que en opinión de experto psicólogo del PRAIS cualquier intervención terapéutica no tendrá más valor que limitarse a colaborar en el mejor manejo del mismo” (páginas 19 y 20).

Adicionalmente, se recibió en autos informe de fecha 11 de junio de 2018, remitido por Programa PRAIS Oriente, elaborado por don Joaquín Carrasco Bahamonde, psicólogo. En dicho informe se concluye que “los hechos ocurridos implicaron una fractura y una desestabilización psicológica que llevan a que Darío, hasta el día de hoy, padezca de una vigilia alta e insomnio. De este modo, funciones vitales como el descanso se han visto perturbadas por la vivencia de violencia extrema”. Se indica que los diagnósticos del demandante son: estrés postraumático, episodios paranoides, ansiedad generalizada y trastorno crónico del sueño.



«RIT»

Foja: 1

Por último, también se valió de prueba testimonial, consistente en las declaraciones de los testigos don Bernardo Morales Catalán, doña Paulina Salas Sáez y doña María Díaz Urrutia, quienes refieren en similares y categóricos términos a las afecciones psíquicas sufridas por el demandante a partir de los hechos que motivan la demanda.

Que valorada la prueba anterior de conformidad con las reglas dispuestas en los artículos 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, y teniendo en especial consideración la gravedad del hecho ilícito del que fue víctima el demandante, las consecuencias psicológicas, además, de las físicas irreversibles, que han llevado que el actor sea portador de una discapacidad del 60%, desarrollando además, de las patología referidas en los considerandos anteriores, una Leucemia Mieloide Crónica, ha de tenerse por suficientemente acreditado el daño moral alegado, regulando esta Juez la indemnización por concepto de daño moral prudencialmente en la suma de \$40.000.000

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en lo referente a la reajustabilidad de las indemnizaciones que se individualizarán en la parte resolutive de esta sentencia, las correspondientes a la indemnización del daño emergente, se reajustarán de conformidad a la variación que experimente el I.P.C. desde diciembre de 2017, que corresponde a la fecha del presupuesto que se consideró para establecer su monto hasta el momento del pago efectivo.

Que, en lo referente a la reajustabilidad de la indemnización por daño moral, ésta se reajustará de conformidad a la variación que experimente el I.P.C desde el día en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el momento del pago efectivo, por cuanto el daño moral es evaluado por el juez en la sentencia, de ahí que las perniciosas consecuencias de la desvalorización monetarias sólo pueden empezar a producirse desde la fecha de la sentencia que regula el daño en comento.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, respecto de los intereses, las sumas contempladas en lo resolutive del fallo devengarán el interés corriente desde la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada y hasta la época de su pago efectivo.



«RIT»

Foja: 1

TRIGÉSIMO: Que, la demás prueba rendida y a la cual no se ha hecho referencia en las motivaciones anteriores en nada altera lo que viene decidido.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes 1437, 1698 y 1702 del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, Constitución Política de la República, Convención Americana de Derechos Humanos, Convenio de Ginebra de 1949 y Ley 19.992, se declara:

I.- Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta con fecha 20 de enero de 2017 y se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante, a título de daño emergente la suma de \$21.288.617 y por concepto de daño moral, el monto de \$40.000.000, más los reajustes e intereses reseñados en los motivos 28° y 29° del presente fallo.

II.- Que cada parte soportará sus costas, por no haber resultado totalmente vencido el demandado.

Regístrese y notifíquese.-

Pronunciada por María Soledad Jorquera Binner, Juez Titular.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, once de Octubre de dos mil diecinueve.**

